

La revolución de la cocaína en Venezuela

#CocaínaEnVenezuela



La revolución de la cocaína en Venezuela

Abril 2022

Autores:

Unidad de Investigación de Venezuela

Diagramación y diseño:

Ana Isabel Rico, Juan Jose Restrepo, Maria Isabel Gaviria - Diseño gráfico

Elisa Roldán - Dirección creativa



Tabla de contenido

1	La transición de Venezuela hacia la producción de cocaína: Cultivos, químicos y evolución criminal.....	5
	<i>El Catatumbo y Zulia: contagio criminal</i>	<i>7</i>
	<i>Apure, el epicentro guerrillero de Venezuela</i>	<i>10</i>
	<i>Venezuela, ¿el siguiente productor de cocaína en América Latina?</i>	<i>12</i>
2	Maduro busca regular el tráfico de cocaína	14
	<i>El narcomapa de Venezuela actualizado</i>	<i>15</i>
3	Más allá del Cartel de los Soles	21
	<i>Mitos y realidades del Cartel de los Soles</i>	<i>23</i>
	<i>Los ‘jefes del cartel’</i>	<i>26</i>
	<i>El cartel de los 2.000 soles</i>	<i>28</i>
	<i>Un nuevo cartel para un nuevo comercio de cocaína</i>	<i>30</i>
	<i>Los operadores del poder.....</i>	<i>32</i>
4	El cartel de Paraguaná: narcotráfico y poder político en Venezuela	33
	<i>Un feudo criminal en el Caribe.....</i>	<i>34</i>
	<i>Narcotráfico y política local</i>	<i>36</i>
	<i>La caída de Chiche Smith</i>	<i>39</i>
	<i>Drogas y el balance de poder.....</i>	<i>41</i>

5 Gordito González y los narcooperadores de Venezuela 43

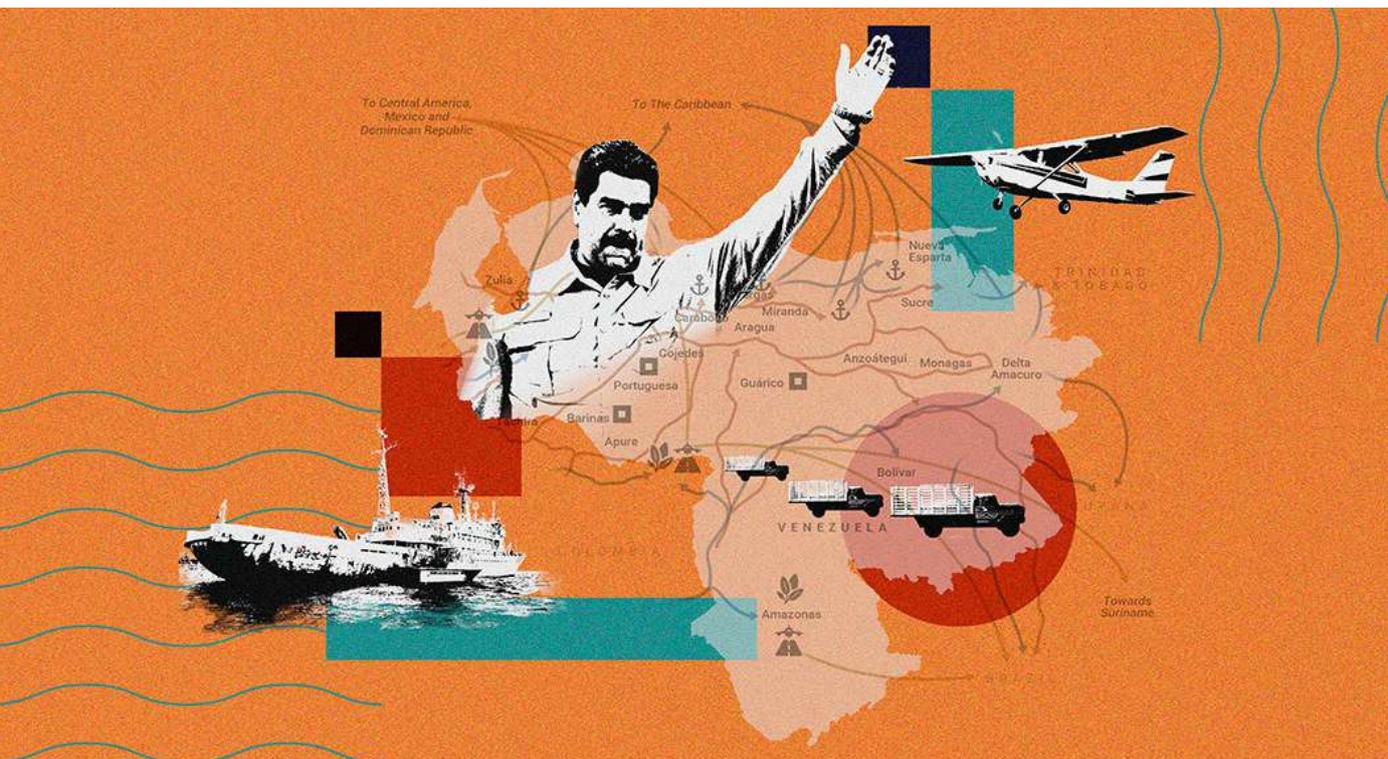
La batalla de los operadores 44

La siguiente generación 48

Un cartel de contratistas 50

1

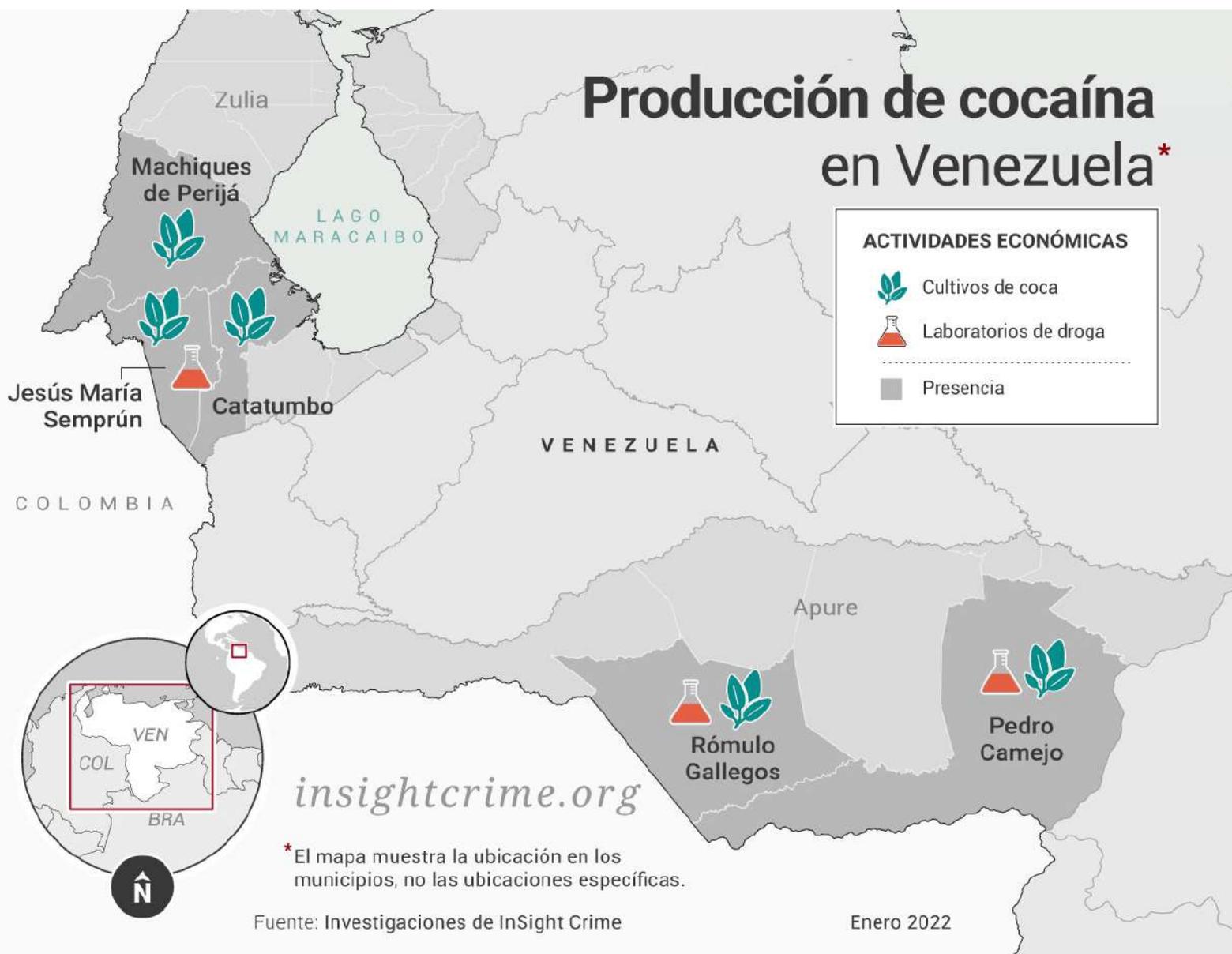
La transición de Venezuela hacia la producción de cocaína: Cultivos, químicos y evolución criminal



En octubre de 2021, el Ministerio del Interior de Venezuela emitió una declaración sobre una operación antinarcoóticos en el estado Zulia; parecía una nota ordinaria pero tuvo implicaciones extraordinarias: el ejército había destruido ocho laboratorios de cocaína, y en la operación los militares incautaron casi media tonelada de coca. Además, erradicaron 32 hectáreas de cultivos de coca y destruyeron más de 300.000 plantas.

Venezuela está produciendo cocaína.

En la región del Catatumbo, en Colombia, que se encuentra al otro lado de la frontera con Zulia, 32 hectáreas no son más que un cultivo de coca de tamaño mediano. Pero esa no es toda la coca que existe en Venezuela. InSight Crime ha descubierto evidencias de la presencia de cantidades significativas de coca en al menos tres municipios de Zulia, y dos más al sur, en el estado Apure. Estas evidencias han sido verificadas y corroboradas por múltiples fuentes confiables.



Además, fuentes en las diferentes zonas, agencias internacionales y los propios informes del gobierno venezolano muestran que los laboratorios de cristalización utilizados para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína han estado proliferando en las mismas áreas.

Todas estas plantaciones y laboratorios están ubicados en territorios dominados por grupos guerrilleros colombianos, que durante generaciones han acumulado experiencia en la siembra y la comercialización de la coca y mantienen estrechos vínculos con elementos del Estado venezolano. Y en contraste con la operación realizada en Zulia, al parecer la mayor parte opera libremente.

Hasta ahora, la producción de cocaína en Venezuela es incipiente, y representa solo una gota en el océano en comparación con los niveles históricos que se han registrado en Colombia en los últimos años. Pero la región fronteriza del país, pobre, aislada, abandonada por el Estado y dominada por grupos armados, representa una placa de Petri perfecta para su extensión. Y en un país ahogado en una crisis económica, gobernado por un régimen corrupto y devastado por la criminalidad, esa es una apuesta peligrosa.

El Catatumbo y Zulia: contagio criminal

La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, y el estado Zulia, en el noreste de Venezuela, han sido colegas criminales durante mucho tiempo.

La frontera entre los dos países en dicha región está delimitada por la Serranía del Perijá, una remota cordillera que ofrece excelentes condiciones climáticas para el cultivo de coca, así como la geografía ideal para ocultar los cultivos, los laboratorios y los grupos armados que los protegen, y así evitar que sean descubiertos por las autoridades.

“Los recolectores de coca siempre tienen las manos maltratadas; el color de su piel cambia”.

Históricamente, los colombianos y venezolanos en ambos lados de la Serranía del Perijá han desempeñado papeles complementarios en esta economía.

En el lado colombiano, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han utilizado sus vínculos con las comunidades campesinas locales para fomentar el cultivo de coca. Actualmente, la ex-FARC Mafia, las disidencias de las FARC que no reconocen el acuerdo de paz de 2016, mantienen su participación en narcotráfico.

En el lado venezolano, el acceso de Zulia al Caribe a través del Lago de Maracaibo, así como numerosas pistas de aterrizaje clandestinas, han convertido al estado en un punto de despacho clave para los cargamentos de drogas hacia Centroamérica y el Caribe.

Esta economía criminal binacional se ve facilitada por una frontera porosa que permite que tanto los bienes ilegales como las personas se muevan con libertad entre los dos países. Mientras que la cocaína colombiana fluye hacia Venezuela para su exportación, la mano de obra venezolana se mueve en la otra dirección para trabajar en los campos de coca de Colombia.

Estos trabajadores migrantes son una característica tan evidente de la vida en la región fronteriza que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los reconocen por la condición de sus manos, según un residente local que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.

“Los recolectores de coca siempre tienen las manos maltratadas; el color de su piel cambia”, dice. “[Los agentes de la GNB] saben a qué personas escoger en el otro lado y no las detienen, pero cuando regresan, les cobran una extorsión”.

Estos trabajadores migrantes traen a Venezuela no solo los ingresos que tanto necesitan, sino también el conocimiento de la producción de cocaína. En Jesús María Semprún, municipio fronterizo de Zulia, InSight Crime habló con uno de estos coccaleros que se encontraba visitando a su familia. Bajo condición de anonimato, describió cómo había encontrado trabajo en una finca coccalera administrada por el ELN en Colombia y cómo trabajó duro para ascender en la jerarquía.

“Allí vi cuánto dinero se podía ganar y entonces me involucré más, viendo cómo hacían la pasta [de coca]”, cuenta. “Un químico encargado de la pasta puede ganar 100.000 pesos [unos US\$25] en un buen día”.

Finalmente, invirtió el dinero y las habilidades que había obtenido para comenzar su pequeña finca coccalera, y con un socio adquirió seis hectáreas de coca en el Catatumbo. Cuenta que más de dos docenas de personas de su ciudad natal siguieron un camino similar para convertirse en cultivadores de coca en Colombia, lavando el dinero que ganaban de las ventas de coca mediante negocios en Zulia.

La mano de obra migrante no es la única contribución de Venezuela a la producción de cocaína en Colombia.

“Los productos químicos son muy fáciles de conseguir en Venezuela”, dijo a InSight Crime un político de la oposición en Zulia, que prefirió no ser identificado por razones de seguridad. “Y se destinan directamente a la producción de cocaína”.

Tanto el político como el coccalero, así como otros residentes de la región fronteriza, dicen que estos precursores químicos se mueven libremente por Zulia y a través de la frontera, con la complicidad o incluso la asistencia activa de los militares venezolanos. Esta dinámica quedó en evidencia en 2019, cuando el general [Aguiles Leopoldo Lapadula Sira](#), quien entonces era comandante de las fuerzas del ejército en Zulia, fue detenido por delitos de narcotráfico, entre ellos por autorizar el tráfico de precursores químicos.

La facilidad para adquirir estos precursores, junto con el [auge en la producción de coca](#) en el Catatumbo colombiano, ha provocado una rápida proliferación de laboratorios de cocaína en suelo venezolano. En noviembre de 2021, el gobierno venezolano [destruyó 60 laboratorios](#). El año anterior, el gobierno reportó la destrucción de 79, la gran mayoría [en el estado de Zulia](#).

En este contexto, la propagación de los cultivos de coca en Zulia era quizá solo cuestión de tiempo.

La coca ha ido acercándose a Zulia desde hace algún tiempo. En el estado se registraron bajos índices de cultivo de coca desde la década de los noventa, y el mapeo de la producción de coca colombiana realizado en 2020 por la [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito \(ONUDD\)](#) muestra que uno de los enclaves de coca más productivos del Catatumbo corre a lo largo de la frontera con Jesús María Semprún.

“Aquí domina el ELN; ellos son los que controlan toda el área desde Río Bravo hasta Río Abajo”.

Aunque el operativo de octubre de 2021 fue la primera gran erradicación de coca en épocas recientes, no fue el último: [las autoridades venezolanas erradicaron](#) otras 31 hectáreas en dos operativos más en febrero de 2022, también en Zulia.

En entrevistas realizadas por InSight Crime durante 2021, más de ocho fuentes, entre ellas residentes de la zona, ganaderos, periodistas e investigadores, confirmaron que los cultivos de coca están echando raíces en los municipios zulianos de Jesús María Semprún, Catatumbo y Machiques de Perijá. Se desconoce la magnitud de las plantaciones, dado que están ubicadas en áreas remotas y a menudo custodiadas por hombres armados.

Las fuentes sostienen que, en muchos casos, estos cultivos están controlados por guerrilleros del ELN que adquieren tierras aptas para la producción de coca, bien sea comprándolas o extorsionando a los agricultores de la región. Desde la desmovilización de las FARC en 2017, el ELN ha llegado a dominar el cultivo de coca en el Catatumbo colombiano, al tiempo que [consolida](#) su presencia en Zulia, donde al parecer operan con una impunidad casi total.

“Aquí domina el ELN; ellos son los que controlan toda el área desde Río Bravo hasta Río Abajo”, dijo a InSight Crime un residente del municipio del Catatumbo, que no quiso que su identidad fuera revelada. “Han estado comprando hectáreas a los propietarios de fincas para el cultivo [de coca]”.

“Si uno tiene una finca que ellos quieren comprar, hay que vendérsela quiera o no, porque van a sembrar coca”, agrega otro vecino de la zona, quien también pidió el anonimato por razones de seguridad.

En algunas zonas, la guerrilla incluso ha desplazado por la fuerza a los terratenientes, como afirman dos ganaderos de la zona que hablaron con InSight Crime de manera anónima por temor a represalias.

“Hay grupos de guerrilleros que están ocupando tierras junto con indígenas o residentes locales, que luego son utilizados para trabajos forzados”, dice uno de los ganaderos. “Cuentan con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado”.

En algunos casos, afirma el otro ganadero, las fuerzas de seguridad han acusado a los terratenientes de narcotráfico para obligarlos a abandonar sus tierras: “Incluso ha habido casos”, sostiene, “en los que han puesto partes de aviones o cosas por el estilo en una finca, para acusar y extorsionar al terrateniente”.

Apure, el epicentro guerrillero de Venezuela

Al sur de Zulia, el estado de Apure, en los llanos occidentales de Venezuela, no parece un candidato apto para el cultivo de coca. En comparación con las montañas tropicales de Zulia, los pastizales llanos de Apure no son adecuados para el cultivo.

Por otro lado, sin embargo, Apure comparte muchas de las características criminales de Zulia. Ubicado en la frontera con el departamento colombiano de Arauca —un histórico bastión de la guerrilla—, sus sabanas poco pobladas han servido durante décadas como refugio de las guerrillas de las FARC y el ELN y punto de partida de los narcovuelos hacia Centroamérica.

Según Mildred Camero, expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) de Venezuela, ocasionalmente se han encontrado pequeñas plantaciones de coca en el estado, al menos desde comienzos de la década de 2000. Y ahora, al igual que en Zulia, hay señales de una aceleración de la producción de cocaína en la región.

Un líder social del municipio de Rómulo Gallegos, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, explica que el cultivo de coca en Apure comenzó de manera tentativa, con estudios de suelo y pruebas en pequeñas parcelas para identificar las variedades de coca más adecuadas para la geografía y el clima de la región. Aunque la coca generalmente crece mejor a altitudes de 1.000 a 1.200 metros, en los últimos años los productores de drogas han desarrollado [cepas más versátiles](#) que abren posibilidades para el cultivo de coca en [regiones que antes eran consideradas inviables](#).

En Apure, estas pruebas al parecer han arrojado resultados. Hoy en día, se encuentran plantaciones de coca dispersas en los municipios de Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, particularmente a lo largo de las orillas de los ríos Capanaparo, Cinaruco y Riecito, según residentes locales, líderes políticos e investigadores.

“Están sembrando mucho; siembran un poco por allá, encuentran un buen punto y siembran dos hectáreas por aquí, otra hectárea por allá, media hectárea más abajo”, dice uno de los políticos. “Donde pueden cultivar 50 [hectáreas], las cultivan; donde pueden cultivar 20, las cultivan”.

Las fuentes no pudieron dar detalles sobre el tamaño de las plantaciones, dado que están fuertemente custodiadas por guerrilleros, en su mayoría miembros de grupos disidentes de las FARC, y suelen estar ocultas detrás de otros cultivos.

“Frente a los cultivos [de coca] sembraron dos o tres hectáreas de plátano o yuca para ocultar la plantación”, afirma el líder social de Rómulo Gallegos.

“La zona donde tienen los cultivos es impenetrable; tienen un estrecho anillo de seguridad por todas partes”, agrega el líder social. “Nadie puede entrar con un teléfono, una cámara o un reloj. Si vas allí, te desnudan, y si la organización no te aprueba, no te dejan entrar”.

Muchas de las plantaciones están ubicadas en regiones indígenas, donde los guerrilleros explotan a las comunidades locales para conseguir mano de obra barata o incluso forzada.

“Las FARC utilizan a los campesinos o a los grupos indígenas para preparar el suelo, sembrar y cosechar los cultivos”, dijo a InSight Crime un habitante de Apure, exintegrante del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien no quiso que su identidad fuera revelada. “La mejor mano de obra barata son los indígenas. Les pagan cuando les da la gana; cuando no quieren pagarles, los amenazan”.

“Han estado instalando laboratorios en Apure desde 2014, pero con más empeño desde 2016”.

Al igual que en Zulia, hay evidencia de que la expansión del cultivo de coca en Apure está siendo facilitada por grupos guerrilleros que utilizan testaferros para comprarles tierras a agricultores de la zona empobrecidos y amenazan a quienes se niegan a vendérselas. Un miembro de la asociación de ganaderos de Apure le dijo a InSight Crime que estas compras forzadas se están llevando a cabo con el conocimiento y la complicidad de las autoridades estatales, lo que él denomina “la colonización de los campos de Apure”.

En la medida en que han proliferado los cultivos de coca en Apure, también se han multiplicado los laboratorios de cocaína. Solo en los primeros 4 meses de 2022, las autoridades reportaron la destrucción de 17 laboratorios.

“Han estado instalando laboratorios en Apure desde 2014, pero con más empeño desde 2016”, afirma el exintegrante del PSUV.

“Trajeron del Putumayo, departamento cerca de la frontera [de Colombia] con Ecuador, a unos hombres a los que llamaron ‘los químicos’”, agrega. “Estos les daban clases a los jóvenes sobre cómo preparar la cocaína”.

La fuente afirma que reclutaron entre 20 y 25 jóvenes de la región para enseñarles el proceso, y les ofrecieron un pago en efectivo de US\$5.000 a cada uno. Mildred Camero corroboró este dato, afirmando que había recibido información similar de jóvenes reclutados para aprender los procesos de cristalización de cocaína en laboratorios venezolanos, muchos de los cuales ahora operan con un alto grado de sofisticación.

Venezuela, ¿el siguiente productor de cocaína en América Latina?

Aún no está claro en qué medida la producción de cocaína ha echado raíces en Venezuela. Si bien InSight Crime solo tiene evidencia sustancial de plantaciones en dos estados, hay rumores en torno a la producción en toda la región fronteriza con Colombia, e incluso más allá.

En el estado Amazonas, ubicado en el extremo suroccidental en límites con Colombia y Brasil, un representante indígena, que no quiso ser identificado por razones de seguridad, le dijo a InSight Crime que se han visto cultivos de coca en los municipios de Autana y Maroa, así como laboratorios de cristalización en Autana.

“Los cultivos [de coca] comenzaron a aparecer hace unos tres años”, dijo durante una entrevista en 2020. “Se siembran en áreas desprotegidas que no tienen títulos legales. [Los grupos guerrilleros] reclutan indígenas para sembrar, cosechar y cuidar la tierra”.

La geografía y el clima del Estado hacen que dicha afirmación sea verosímil, pero, debido a la remota ubicación del estado, InSight Crime no ha podido verificar las afirmaciones.

Camero, la exzar antidrogas, declaró que en sus años de experiencia ha registrado cultivos de coca en Amazonas y en el estado fronterizo de Táchira, e incluso ocasionalmente en estados centrales como Guárico. También ha recibido informes de pequeñas instalaciones de procesamiento de cocaína en

los estados de Guárico, Falcón, Bolívar y Monagas, aunque no está claro si se trata de laboratorios de cristalización, o simplemente de sitios donde se preparan drogas procesadas para la venta al por menor.

Pero independientemente de la magnitud actual, el riesgo sigue siendo alto: una vez que la producción de cocaína se arraiga en un país, es muy difícil dar marcha atrás.

Como demuestra la experiencia de Colombia, los cultivos de coca ofrecen ingresos irresistibles tanto para grupos criminales como para agricultores arruinados, y una vez que la práctica está firmemente establecida, los intentos de erradicarla fomentan conflictos, resentimiento y mayores lazos entre los grupos armados y las comunidades rurales.

Actualmente, la producción de cocaína en Venezuela está siendo impulsada por los mismos grupos expertos en capitalizar estas dinámicas para fomentar la producción de cocaína en Colombia. Y estos grupos guerrilleros tienen una poderosa motivación para actuar a través de la frontera: la oportunidad de controlar cadenas de suministro autónomas donde pueden cultivar coca, procesar cocaína y despachar vuelos internacionales de drogas, todo dentro de un área donde pueden operar con una virtual impunidad gracias a sus vínculos con elementos corruptos del Estado.

Dado que Venezuela se ha venido hundiendo cada vez más en la ruina económica y el caos criminal, ofrece un terreno fértil para el arraigo de dichas dinámicas. A esta volátil mezcla se suma un gobierno con problemas de liquidez y aislado por la comunidad internacional, y que por mucho tiempo se ha mostrado dispuesto a tolerar o incluso facilitar el tráfico de drogas.

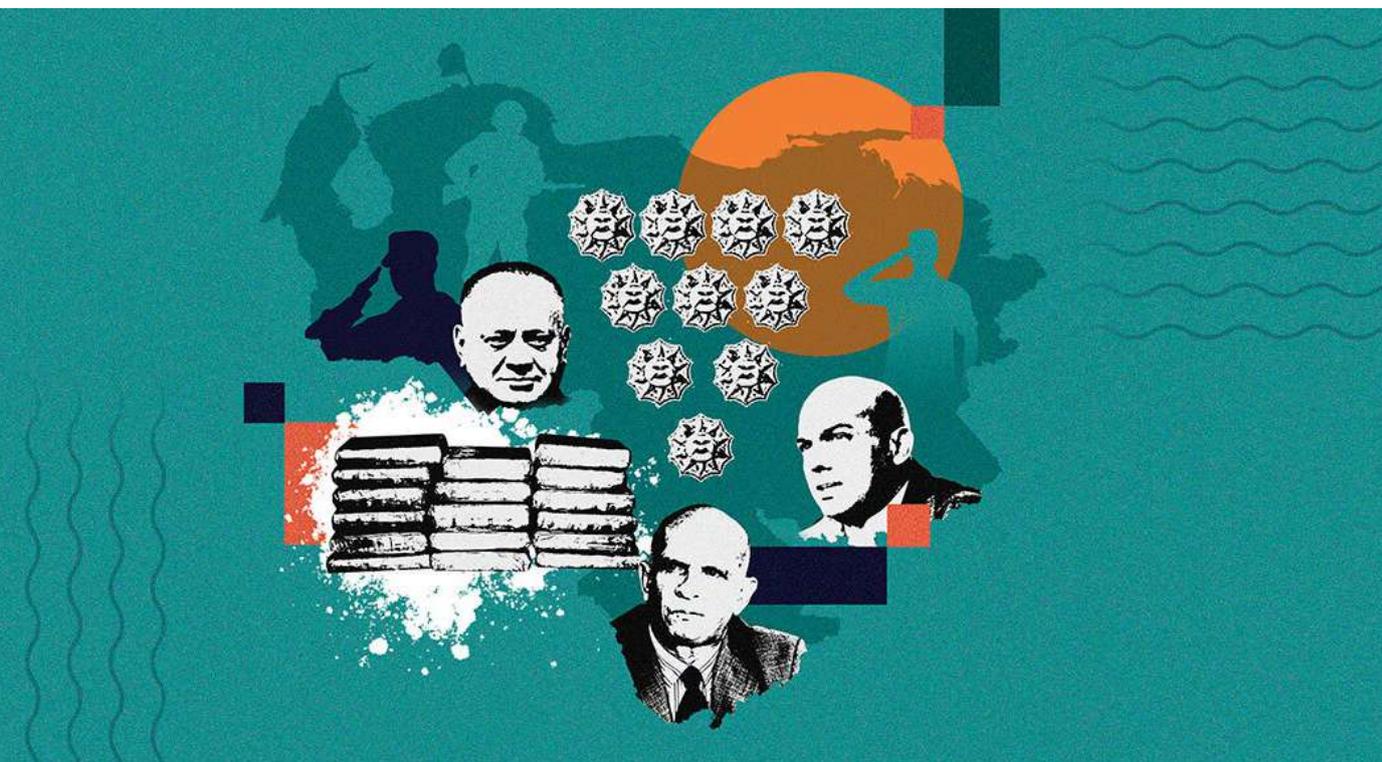
Y si bien la mayor parte de la producción de cocaína en Venezuela hasta ahora no parece más que un retoño de las operaciones colombianas, el país también alberga una gran cantidad de actores criminales locales que, como parece estar sucediendo en Zulia, pueden tratar de apoderarse de esta naciente economía.

“[Los venezolanos] tienen más capacidad que antes”, dijo Camero, cuando se le preguntó sobre los factores que impulsan la escalada de la producción de cocaína en Venezuela. “Han adquirido conocimientos; tienen sus propios contactos. Saben dónde están las rutas y pueden operar de manera independiente, sin depender de los colombianos”.

Si estos procesos continúan sin control, la transición de Venezuela de país de tránsito a país productor de cocaína podría apenas estar comenzando.

2

Maduro busca regular el tráfico de cocaína



En 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de uno de los centros más importantes de distribución de cocaína del mundo, y con él heredó un narcoecosistema único, donde se había borrado la línea entre la delincuencia organizada y las instituciones del estado. Desde entonces, tanto el narcotráfico como la participación del Estado en el negocio no han parado de crecer.

En la era Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores que buscan acceso a la riqueza prometida. Asimismo, la participación del país en la cadena global de suministro se ha expandido más allá del tránsito de drogas, con las primeras incursiones en la producción de cocaína en el país.

En el mismo periodo, el narcotráfico ha cobrado importancia como un componente de las estrategias de Maduro para aferrarse al poder ante los embates sufridos por su gobierno a causa de las constantes crisis sociales,

políticas y económicas que enfrenta el país. Su objetivo no ha sido captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para premiar a los poderes políticos, militares y criminales que Maduro necesita para mantener el control del gobierno.

Hoy en día, las tensiones se represan en el sistema de narcotráfico que ha evolucionado bajo el mandato de Maduro. Cada día es más difícil controlar a los grupos criminales que amasaron fortuna y poder gracias a la cocaína, mientras los actores estatales que se rebuscan los recursos para sus administraciones son a la vez competidores y colaboradores, y nuevos fenómenos de tráfico, como el desarrollo de la producción de cocaína se expanden. En medio de todo esto, Maduro intenta imponer orden en el creciente caos criminal.

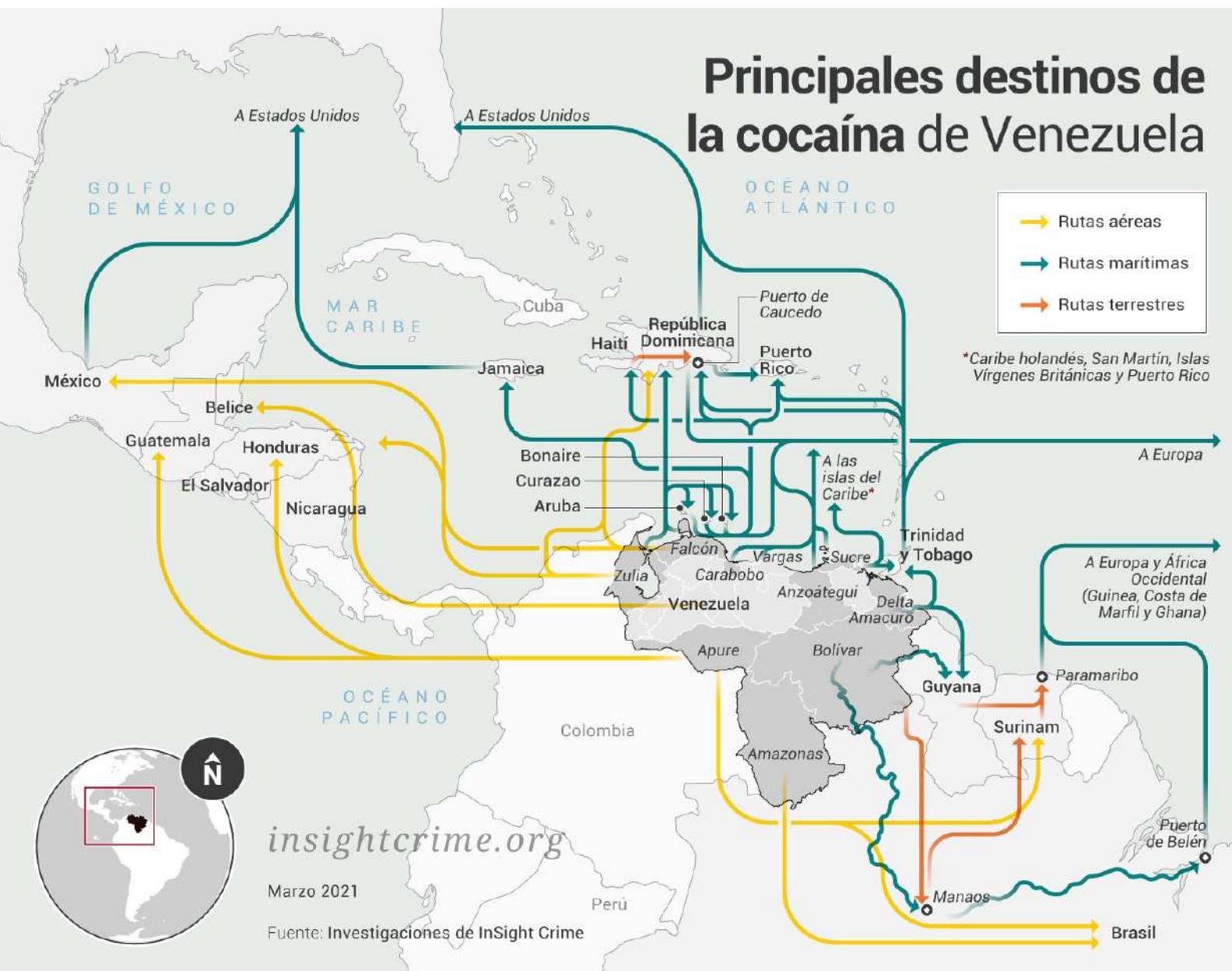
El narcomapa de Venezuela actualizado

El [gobierno estadounidense estima](#) que anualmente se trafican por Venezuela unas 250 toneladas de cocaína, que representan entre el 10 y el 15 por ciento de la [producción global](#) estimada. A lo largo de tres años de investigación, que incluyó trabajo de campo en puntos críticos para el tráfico de drogas, cientos de entrevistas y monitoreo diario de decomisos, arrestos y operativos antinarcóticos, InSight Crime ha identificado los flujos de cocaína que se mueven por Venezuela y las redes criminales que los mantienen en movimiento.

Las rutas de la cocaína en Venezuela pasan por casi todos los estados del país. La mayoría de los cargamentos inician su travesía en Colombia antes de cruzar hacia los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Es también en la región fronteriza donde se está arraigando la incipiente producción de cocaína en Venezuela.

Luego de eso, algunos cargamentos salen directamente desde la región limítrofe a bordo de avionetas, mientras que otros siguen su recorrido por tierra hacia la costa Caribe o hacia puertos o aeropuertos de Venezuela. De allí, la cocaína toma rumbo al norte, hacia Centroamérica o a las islas del Caribe, o al sureste, hacia Brasil, Guyana o Surinam, para terminar abasteciendo los dos mayores mercados de cocaína del mundo: Estados Unidos y la Unión Europea.

En la región fronteriza, estas rutas están dominadas por los grupos guerrilleros colombianos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las ex-FARC mafia, controlan los pasos fronterizos, los corredores de tráfico y las pistas de aterrizaje clandestinas por cuyo uso cobran a los narcos independientes. Su control sobre las zonas cocaleras y sus conexiones con compradores mexicanos y brasileños implican que hay facciones guerrilleras también dedicadas a la producción, trasiego y venta de sus propios cargamentos del alcaloide.



Por fuera de la región fronteriza, los traficantes venezolanos dominan el negocio.

La región Caribe, al oeste del país, es el dominio de grupos como el Cartel de Paraguaná y el Cartel de la Guajira, cuyos líderes negocian el envío de cargamentos a otros países, controlan rutas y actúan como padrinos mafiosos en las comunidades locales.

Entretanto, a lo largo de las rutas de transporte internas y al este del Caribe, violentas bandas criminales, conocidas como “megabandas”, entre las que se cuentan el Tren de Aragua, el Tren del Llano, la megabanda de San Juan de Unare y Los 300, han ganado acceso al tráfico transnacional de narcóticos, bien sea cobrando a los traficantes por su paso por las zonas bajo su control o tomándose territorios estratégicos y montando sus propias redes de exportación.

Sin embargo, aunque estas organizaciones criminales mueven el grueso de la cocaína, son los actores estatales quienes modelan y controlan el mundo en el que operan. En este contexto, los traficantes dependen del acceso a estas redes penetradas por el estado y de las ventajas que ese acceso les confiere.

“Las organizaciones criminales han infiltrado todas las instituciones del estado”, declaró una exfuncionaria del Ministerio Público, que habló con InSight Crime bajo condición de que se mantuviera su anonimato. “Todas tienen en su nómina a un buen número de funcionarios públicos para que les permitan mover sus alijos de drogas”.

Las células narcotraficantes en el ejército y la policía, que se denominan colectivamente Cartel de los Soles –cuyo modus operandi se explora en detalle en el capítulo 3 de esta investigación— trasiegan narcóticos por todo el país en representación de los grupos criminales, controlan las exportaciones de drogas por medio de puertos y aeropuertos, y facilitan y protegen las redes de narcotráfico. Miembros corruptos del sistema judicial del país venden la libertad a los criminales que tienen negocios con el régimen, y como se revela en el capítulo 4, los gobiernos locales dirigen el contexto del tráfico en territorios clave.

A su paso por estas rutas, el dinero de la cocaína fortalece estos grupos criminales y ahonda la corrupción. En la mayoría de los países, esto se considera un cáncer que corroe las instituciones del estado y el tejido social a medida que se propaga, pero en Venezuela Maduro y su régimen han encontrado la manera de beneficiarse de este fenómeno.

Tras años de cleptocracia y malos manejos de la economía, y sometido a uno de los regímenes de sanciones más draconianos del mundo, el estado venezolano se encuentra casi en bancarrota y con una desesperada necesidad de moneda fuerte. Allí la cocaína puede hacer lo que el estado no puede: pagarle a la gente. Ya sea garantizando que los soldados venezolanos reciban lo suficiente para comer, comprando la lealtad de caudillos políticos corruptos, o incentivando a grupos armados para que defiendan el régimen, el dinero de la droga puede con todo.

“El estado ha sustituido los recursos que no tiene por tolerancia hacia las actividades ilegales”.

Es improbable que Maduro tenga conocimiento de transacciones específicas de tráfico de cocaína, y mucho menos probable es que esté involucrado personalmente en ellos. Sin embargo, se ha posicionado a sí mismo y a su régimen como guardianes del narcotráfico en Venezuela. El control clientelista

que ejerce el régimen sobre las instituciones políticas, militares y judiciales significa que el régimen está en posición de decidir quién tiene permitido beneficiarse del narcotráfico, así como de otras economías ilícitas, como el contrabando, la malversación de fondos, el tráfico de armas y la explotación ilegal de oro.

“El estado ha sustituido los recursos que no tiene por tolerancia hacia las actividades ilegales”, dijo un politólogo venezolano, que dese mantener su anonimato por temor a la persecución, a InSight Crime. “El estado sabe que mientras haya quien devengue recursos mediante estos mecanismos, no tendrá interés en derrocar al gobierno”.

Al facilitar su participación en el narcotráfico transnacional, Maduro también se asegura de que los actores más importantes tengan gran interés en mantener el statu quo, lo que asegura su posición como líder del régimen.

“La Corte Penal Internacional, procesos judiciales en Estados Unidos, investigaciones, procesos internos”, comentó el experto, enumerando las amenazas que se ciernen sobre los funcionarios públicos implicados en el tráfico de drogas y otras actividades al margen de la ley. “Los costos del cambio político son demasiado altos”.

Para Maduro y sus aliados, mantener control de este complejo ecosistema de narcotráfico constituye un delicado acto de malabarismo.

El tráfico de drogas, el estado y los movimientos políticos chavistas en Venezuela están cada vez más fracturados y divididos. Hay demasiados actores y demasiada competencia, no solo entre grupos narcotraficantes rivales, sino también entre divisiones de las fuerzas de seguridad y facciones políticas rivales.

El sistema se desmorona periódicamente en luchas de poder locales, fallas de comunicación entre nodos traficantes o porque los involucrados no quieren ceñirse a las reglas tácitas.

De manera esporádica, se desatan conflictos en el campo por territorios claves para el tráfico de drogas que desencadenan [masacres](#), [tiroteos](#) y [desplazamientos](#), y que [alimentan](#) unas de las tasas de homicidios más altas de la región.

Además, las tormentas políticas son frecuentes entre, e incluso dentro, de los organismos estatales, pues los comandantes de las fuerzas de seguridad rotan en zonas donde no entienden las dinámicas y lealtades locales, o en otros casos una rama de las fuerzas de seguridad [tropieza](#) con las operaciones de tráfico de otro actor, e incluso las [persigue deliberadamente](#).

“En ocasiones, estas dinámicas económicas se salen de control, porque todo el mundo empieza a hacer lo que le viene en gana, manejando las cosas en su territorio como le prece, y eso significa que el gobierno pierde control”, comentó el politólogo.

Ese caos es contraproducente para la gobernanza, pero más que eso es malo para el negocio. Aunque la cocaína puede moverse por el país con la aprobación tácita de los altos líderes, los traficantes carecen de dos de las cosas que más valoran: la confianza de que un cargamento llegará a su destino y la posibilidad de responsabilizar a alguien si no llega.

“A fin de cuentas, no se sabe con quién hay que hablar en Venezuela”, comentó un experto en narcotráfico en el departamento colombiano de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, y quien pidió que se mantuviera su anonimato por motivos de seguridad. “Podrían hacerse arreglos con un comandante de la Guardia Nacional, pero entonces llega otro y lo detiene; así es como los traficantes han perdido grandes cargamentos en Venezuela”.

“El sistema judicial se ha politizado totalmente”.

En medio de tal caos, el régimen Maduro cuenta con varias herramientas para tratar de imponer orden en el sistema.

Uno es su control sobre el corruptísimo sistema judicial en Venezuela, que permite a los líderes políticos conceder impunidad a los actores que gocen de su favor, y retirarla si caen en desgracia.

“El sistema judicial se ha politizado totalmente”, señaló una exfuncionaria del Ministerio Público. “La política subyuga a los fiscales”.

Quizás los intentos más visibles del estado por dirigir y controlar el tráfico de cocaína se encuentran en su despliegue de fuerzas de seguridad en operativos antinarcóticos. Las estrategias detrás de esos despliegues son evidentes en la gran divergencia de los patrones de decomisos de drogas en las diferentes regiones del país.

“Se pierden cargamentos cuando se corre la voz en Caracas, cuando las órdenes vienen de arriba”, señaló un funcionario del Ministerio de Gobierno, que habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera su anonimato.

El estado de Amazonas, al sur del país en la frontera con Colombia, por ejemplo, es uno de los territorios que ofrece mayor estabilidad para el tráfico de cocaína. Allí los corredores de drogas están bajo el control del Frente Acacio Medina, de las ex-FARC mafia. Allí existe **evidencia sólida** de colusión entre los disidentes y el ejército; y para completar, el gobernador del estado es seguidor de Maduro.

Una revisión de medios y fuentes oficiales hecha por InSight Crime halló cero decomisos de cantidades importantes de cocaína en ese estado entre enero de 2019 y abril de 2021.

En contraste, los estados de Zulia y Táchira, al norte del país, representaron el grueso de los decomisos registrados entre 2019 y 2021. Estos son **territorios disputados** que se han visto invadidos por bandas criminales, sucesores de grupos paramilitares, guerrillas colombianas y narcos independientes, quienes compiten por el control del negocio.

Ese patrón se repite en todo el país. Donde hay aliados confiables para el tráfico de drogas, que paguen a las personas indicadas y operen sin hacer mucho ruido, los decomisos y otros indicadores, como arrestos y operativos sorpresa, se mantienen bajos. Por otro lado, donde hay caos criminal, o actores que infringen las reglas, las operaciones de las fuerzas de seguridad aumentan.

La estrategia ha sido claramente visible en el conflicto del hampa más dramático que ha golpeado a Venezuela en los últimos años: la batalla por el estado de Apure.

Durante años, prácticamente no se conocieron decomisos de drogas en el estado, aunque ha sido un importante punto de ingreso y salida de cocaína por más de una década. Pero desde la ruptura de las relaciones entre el ejército venezolano y Frente 10 de las ex-FARC en 2021, las autoridades han presentado cientos de kilos de cocaína incautados y reportado la destrucción de pistas clandestinas y laboratorios de procesamiento de cocaína.

Estos operativos de las fuerzas de seguridad y las investigaciones judiciales son una demostración del poder de Maduro, pero también su debilidad, en especial si no pueden aplastar automáticamente a los grupos que se salen del redil. Aunque los actores que incumplen las reglas pueden ser eliminados, el sistema mismo puede ser demasiado anárquico y poderoso para que pudiera pensarse en algún control real.

Los enemigos políticos del régimen de Maduro prefieren considerar el negocio de la cocaína venezolano bajo la lente izquierdista del gobierno, que describe el tráfico de narcóticos como un monopolio de estado nacional. Pero en realidad, se acerca más al capitalismo salvaje que se observó tras el colapso de la Unión Soviética: un juego de riqueza y poder donde gánsteres y oligarcas se abren paso a los codazos mientras un líder autoritario trata de mantener cierto orden.

3

Más allá del Cartel de los Soles



En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una explosiva denuncia en la que se acusaba de “narcoterrorismo” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de su gobierno, y se les señalaba de liderar la organización narcotraficante conocida como el Cartel de los Soles.

El [documento](#) describe al Cartel de los Soles como un temible cartel de la droga, liderado por un dictador, y cuyo brazo armado es la guerrilla más poderosa en la historia de América Latina. Sostiene que dichos narcos, que se hacen pasar por políticos, y sus cómplices terroristas, tramaron un siniestro complot “narcoterrorista” para “inundar a Estados Unidos de cocaína y provocar los efectos nocivos de la adictiva droga en los consumidores de este país”.

Redes de tráfico del Ejército de Venezuela



Recaudación de “impuestos” al tráfico

Las redes de tráfico realizan pagos periódicos a las unidades militares locales para que les permitan operar con impunidad; por ejemplo, para que no intervengan en las operaciones de las pistas de aterrizaje clandestinas o de los laboratorios de cocaína.

Creación de corredores de paso

Las redes de tráfico les pagan a las unidades militares para garantizar el paso seguro de los cargamentos de droga a través de ciertos territorios. Esto incluye, por ejemplo, hacer cobros en los puestos de control en las carreteras, permitir que los vuelos clandestinos de drogas autorizados puedan moverse por el espacio aéreo venezolano, o garantizar que no se realicen patrullas marítimas en ciertos momentos para permitir el paso de narcoaviones.



Transporte de drogas

En ciertas rutas de tráfico, las unidades del ejército transportan drogas utilizando vehículos militares, especialmente a lo largo de los corredores internos que unen por carretera la región fronteriza con los puntos de despacho.

Control de la infraestructura de tráfico

El control militar de la infraestructura utilizada para el despacho de drogas, sobre todo los puertos y aeropuertos, puede implicar que las exportaciones de drogas sean organizadas directamente por funcionarios militares ubicados en estas áreas. Dichos funcionarios coordinan las operaciones pagándoles a otros funcionarios o trabajadores que ocupan puestos clave para garantizar que las drogas pasen por los controles de seguridad y que se puedan subir a las cargas sin ser detectadas.



La realidad es más compleja de lo que suponen esas caracterizaciones. El Cartel de los Soles nunca ha sido un cartel de drogas. Por el contrario, es una red porosa y fluida de células traficantes arraigada en las fuerzas de seguridad venezolanas, y facilitada, protegida, y, en ocasiones, dirigida por actores políticos.

Y hoy en día dicha red está evolucionando. Desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, el narcotráfico en Venezuela se ha vuelto cada vez más fragmentado y complejo, y las figuras más poderosas del chavismo se han distanciado cada vez más del trabajo sucio del tráfico de drogas. Hoy en día, el fantasma del “Cartel de los Soles” enmascara el hecho de que la alianza Estado-narcotráfico en Venezuela ya no es tanto una organización dirigida por el régimen chavista sino más bien un sistema regulado por este.

Mitos y realidades del Cartel de los Soles

La acusación contra Nicolás Maduro y sus co-conspiradores presenta una narrativa simplificada, y en general distorsionada, del narcotráfico en Venezuela —una versión hollywoodense del Cartel de los Soles—. Pero si bien las conclusiones de los fiscales pueden parecer exageradas, las evidencias incluidas en la acusación y las numerosas imputaciones y sanciones que le precedieron ilustran lo que en realidad es el Cartel de los Soles.

En tres años de investigación, InSight Crime corroboró muchas de las estructuras, relaciones, prácticas y operaciones que surgen de la evidencia obtenida en el trabajo de campo en regiones estratégicas para el narcotráfico. Esto generó un sinnúmero de entrevistas con miembros activos y retirados de las fuerzas de seguridad, agentes antinarcóticos, fiscales, dirigentes políticos de los dos polos ideológicos, de comunidades afectadas por el narcotráfico y de personas que trabajaron en ellas, de expertos, investigadores, analistas, entre otros.

En ocasiones, los señalamientos contenidos en la acusación de 2020 parecen hiperbólicos. El documento señala que durante su mandato Hugo Chávez conspiró contra Estados Unidos junto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para “priorizar el uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos e importar la mayor cantidad de cocaína posible a dicho país”.

Sin embargo, esta afirmación no se ve respaldada por los patrones de tráfico de estupefacientes de ese momento. En la época de Chávez, la cocaína inundó a toda Venezuela —pasando de 50 toneladas métricas en 2004 a 250 toneladas métricas en 2007, según estimaciones del gobierno de Estados Unidos—. No obstante, gran parte de ese flujo de droga se dirigía a Europa, pues Venezuela se estaba posicionando como la principal plataforma de envíos hacia el floreciente mercado europeo.

Adicionalmente, los fiscales norteamericanos alegan que las FARC entrenaron a “un grupo de milicianos no autorizado que funcionó, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas al servicio del Cartel de Los Soles”. En este caso, si bien **hay evidencia** de que las FARC entrenaron a grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos, estas organizaciones no tienen la forma de un cartel. Por el contrario, responden a lineamientos políticos, tienen una presencia geográfica limitada y poca capacidad militar, y no desempeñan ningún papel en el tráfico transnacional de drogas.

Pero los principales puntos débiles de la imputación surgen del intento de los fiscales de construir una narrativa sistemática a partir de una realidad caótica.

La historia que relatan comienza en 1999, año en que Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela.

Las autoridades estadounidenses alegan que el Cartel de los Soles fue conformado ese año por “funcionarios venezolanos de alto rango” provenientes del “ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial”. Según la acusación, el cartel inmediatamente hizo un trato con los líderes de las FARC, la guerrilla que controlaba gran parte de la producción de cocaína en la región fronteriza, con el fin de “pasar parte de sus operaciones a Venezuela bajo la protección de dicho cartel”.

Esto, dice el documento, significó el inicio de una conspiración “narcoterrorista” que duraría más de dos décadas.

*“No solo se hicieron los de la vista gorda,
sino que se involucraron en el negocio”.*

Pero la participación de altos funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas, e incluso el nombre del Cartel de los Soles, que se llama así por la insignia del sol que indica el rango de general en el ejército venezolano, son anteriores al ascenso de Chávez.

Y si bien no hay duda de que las FARC establecieron operaciones en Venezuela con la anuencia de Chávez, como se documenta en la reciente **investigación** de InSight Crime sobre la dinámica de la guerrilla en el estado Apure, este fue un proceso gradual en el que las simpatías políticas se solidificaron en una alianza estratégica.

Lo de las drogas llegó más tarde, contó a InSight Crime un exfuncionario chavista de la región fronteriza, quien solicitó el anonimato por asuntos de seguridad.

Según el exfuncionario, Chávez dijo a los empleados del gobierno local que nombraría generales de confianza para que supervisaran la cooperación con las FARC, y que los militares y el gobierno deberían hacerse los de la vista gorda frente a las actividades de narcotráfico de la guerrilla.

“No solo se hicieron los de la vista gorda, sino que se involucraron en el negocio”, dijo. “Cada uno tenía un narco de confianza para administrar el negocio. Buscaban gente de confianza, les daban dinero, se conectaban con los narcos a los que les permitían mover cocaína y creaban una relación con ellos para comprar y distribuir las drogas”.

“Y con el control que tenían de los aeropuertos y los puertos, y por supuesto de las carreteras, hicieron que todo fluyera a través de Venezuela. Así es como empezó”.

Esta evolución quedó en evidencia con la historia del exespía militar venezolano Hugo Carvajal, documentada en varias sanciones y acusaciones en su contra.

En 2008, el [Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carvajal](#) por sus conexiones con las FARC, acusándolo de proteger los cargamentos de drogas incautados a la guerrilla, suministrarles armas y documentos de identificación del gobierno, y permitirles controlar la región fronteriza de Apure-Arauca, una de las principales arterias del tráfico de drogas hacia Venezuela.

“[El Cartel de los Soles] es una estructura para mantener contentos a los militares”.

[Una acusación redactada en 2013](#) hizo un rastreo de la creciente participación de Carvajal en el narcotráfico mediante su relación con el Cartel del Norte del Valle, de Colombia, relación que, según los fiscales, comenzó alrededor de 2004. Las primeras denuncias del caso hacen referencia a una clásica estafa de protección, mediante la cual Carvajal se hizo el de la vista gorda frente a las operaciones de tráfico del cartel, ofreció protección a sus miembros para que no fueran capturados y les proporcionó inteligencia sobre las operaciones antinarcóticos a cambio de dinero. Pero, como señala el documento, algún tiempo después, Carvajal negoció cientos de kilos de cocaína con traficantes del Norte del Valle e invirtió en cargamentos que otros traficantes exportaban desde Venezuela.

La acusación del Cartel de los Soles de 2020 sostiene que para 2013 Carvajal estaba organizando envíos transnacionales. Los fiscales acusaron a Carvajal de coordinar [el conocido caso de Air France](#), en el que las autoridades francesas incautaron 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo proveniente del Aeropuerto de Maiquetía, donde el sobrino de Carvajal era el oficial del ejército a cargo de la seguridad.

A medida que las redes del Cartel de los Soles se solidificaron y ganaron influencia, los propios funcionarios antinarcóticos del presidente [levantaron](#)

las alarmas. Pero para Chávez, que tenía fresco el recuerdo de golpe militar en su contra en 2002, la corrupción sistémica de los militares era un pequeño precio a pagar para garantizar su lealtad.

Así, la verdadera función del Cartel de los Soles no era usar la cocaína como arma contra Estados Unidos, sino apuntalar el poder político en su propio país.

“[El Cartel de los Soles] es una estructura para mantener contentos a los militares”, dijo a InSight Crime un exfuncionario antinarcóticos venezolano que no quiso que su identidad fuera revelada por razones de seguridad.

Con rienda suelta, el cáncer de la corrupción relacionada con drogas se extendió rápidamente por todas las instituciones del Estado.

“El ejército y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron corrompidos hace 30 años, luego los grupos antinarcóticos fueron corrompidos, y también corrompieron a agentes de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) en Venezuela, la CICPC y diversos políticos”, relató a InSight Crime un exdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quien habló bajo condición de anonimato.

La acusación del 2020 es enfática en representar las diversas redes de corrupción y narcotráfico que crecieron dentro del Estado como una organización coherente y controlada, lo cual conduce a algunas afirmaciones paradójicas sobre sus operaciones. En una sección, el cartel es acusado de pagar sobornos para facilitar el tráfico de drogas al tiempo que es el beneficiario de esos mismos sobornos.

En realidad, dentro del Cartel de los Soles no hay control central ni jerarquía.

“Dicen ‘los Soles’ porque hay mucha gente del gobierno y militares involucrados, pero no funciona como un cartel como tal”, afirmó un exfuncionario chavista. “No es algo que esté organizado, no todos se reúnen para hacer esto. Es una cosa institucional, una cosa de gobierno”.

Los ‘jefes del cartel’

Las pruebas que aparecen en las acusaciones y sanciones contra el cartel, muchas de las cuales InSight Crime pudo corroborar con múltiples fuentes en zonas claves para el narcotráfico venezolanas, reflejan una situación más compleja que la que presenta la narrativa de los fiscales.

De acuerdo con las acusaciones, las drogas eran transportadas por células narco inmersas en el ejército, además de incorporar otras entidades del Estado, como la policía o las aduanas. Además, los cargamentos también eran trasladados por las FARC y redes de tráfico de drogas “autorizadas”.

Por su parte, quienes fueron identificados por las autoridades estadounidenses como los “[jefes del cartel](#)” utilizaron su poder, influencia y conexiones para hacerse a un lugar en la cadena del narcotráfico, ofreciendo protección a los propietarios de las drogas, así como acceso a la infraestructura de transporte y conexiones con las redes de tráfico de drogas en el país. Algunos -se presume-, dieron un paso más allá y comenzaron a negociar sus propios cargamentos.

Cada uno tenía un portafolio de servicios diferente que podían ofrecerles a los traficantes.

Algunos de esos servicios estaban relacionados con sus puestos en el Estado, especialmente los de operadores militares. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino, [está acusado](#) de crear corredores de libre circulación para los narcovuelos. Los cargamentos despachados por los traficantes que le habían hecho pagos salían del país sin problema, los que no, por otro lado, eran incautados por las autoridades.

Otros oficiales, por su parte, les ofrecían a los traficantes poderosas conexiones con el hampa. Uno de ellos, el general de división del Ejército Clíver Alcalá, fue, presuntamente, uno de los principales interlocutores del Estado venezolano con las FARC, quienes le ofrecieron acceso directo al suministro de cocaína del grupo. Alcalá también [mantuvo una estrecha relación con el Cartel de la Guajira](#), que manejaba varias rutas de tráfico a las islas del Caribe.

Para otros, la ventaja competitiva consistía en su control de la infraestructura de transporte. Entre ellos se encuentran el actual ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck el Aissami, y su aliado cercano, el actual ministro de Energía y exdirector de la GNB, Néstor Reverol. Ambos [son señalados de cobrar a los narcotraficantes](#) por usar los puertos y las bases aéreas bajo su control para el envío de drogas al exterior. Si bien muchos de los cargamentos que ellos ayudaron a despachar pertenecían a conocidos narcos como el famoso traficante Walid Makled, según los investigadores estadounidenses otros alijos pertenecían parcial o totalmente a El Aissami.

Los dos perfiles más dispares entre los operadores del Cartel de los Soles son los de los dos hombres que llegarían a dominar el chavismo y la política venezolana tras la muerte de Hugo Chávez en 2013: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Las huellas de Cabello están en todas partes. La acusación del Departamento de Estado de 2020 lo menciona en casi todos los eventos descritos en el documento: negociando cargamentos de varias toneladas con las FARC, supervisando personalmente la entrega de ametralladoras, municiones y lanzacohetes a la guerrilla como pago por cocaína, y organizando exportaciones de droga a América Central, México y Europa.

La [sanción](#) impuesta por el gobierno norteamericano contra Cabello lo acusa también de organizar envíos de cocaína a la República Dominicana, para luego ser despachados a Europa, y de compilar cargamentos de drogas incautadas para luego exportarlas a través de un aeropuerto perteneciente al gobierno venezolano.

Fuentes que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato, entre los que se encuentran funcionarios y exfuncionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad, expertos y fuentes en las zonas de narcotráfico, repitieron estas acusaciones e hicieron muchas más, aunque pocas de estas pudieron ser verificadas por InSight Crime de manera independiente.

Las fuentes suelen mencionar a Cabello como el hombre que controla o lidera el Cartel de los Soles: “el capo de los capos”, como lo describió un exfuncionario antinarcóticos.

Independientemente de si esta es una información exacta u otra versión hollywoodense de una realidad más compleja, Cabello se ha convertido indiscutiblemente en la cara pública del Cartel de los Soles.

Maduro, por el contrario permanece en las sombras, pues es escasa la evidencia que lo vincula con el narcotráfico.

La acusación de Estados Unidos lo describe como un operador general tras bambalinas, eliminando a los jueces honestos del poder judicial o utilizando su posición como el entonces ministro de Relaciones Exteriores para intervenir con otros países con el fin de proteger los intereses del narcotráfico o para negociar acuerdos comerciales que pudieran servir como fachada para lavar el dinero de la droga.

En una de las pocas ocasiones en que se le menciona en relación directa con un cargamento de cocaína tiene que ver con los reproches que supuestamente hizo a Cabello y Carvajal por usar a Maiquetía como punto de salida para el cargamento de Air France incautado en el país europeo.

La experiencia de Maduro en manipular las condiciones del juego para proteger a sus aliados y sus operaciones criminales le serviría mucho después, cuando sucedió a Chávez como presidente en 2013.

El cartel de los 2.000 soles

Las pruebas contra los presuntos “líderes” del Cartel de los Soles presentadas por investigadores estadounidenses, así como las acusaciones hechas por [informantes](#) y [renegados del régimen](#), comienzan a debilitarse con la muerte de Hugo Chávez y desaparecen por completo después de 2017.

Muy seguramente, esto no es una coincidencia.

“El Cartel de los Soles tal como lo conocimos puede que ya no exista”, dijo a InSight Crime el analista de seguridad Douglas Farah, quien ha dirigido investigaciones sobre las conexiones criminales de los chavistas en Venezuela. “El Cartel ha pasado de ser una estructura militar y se ha abierto a la entrada de civiles y actores criminales con verdadero poder económico”.

El propósito central del Cartel de los Soles continúa siendo el mismo de siempre: ayudar a un presidente chavista a aferrarse al poder. Sin embargo, los retos que enfrenta Nicolás Maduro han cambiado a medida que el país se ha precipitado a una crisis económica y política. El presidente encabeza un Estado casi en bancarrota, y está bajo la presión constante de los opositores políticos en el país, en el extranjero e incluso dentro del chavismo y el mismo Estado venezolano.

En este contexto, el Cartel de los Soles ha cambiado para ajustarse a estos desafíos, y ha pasado de ser una red de tráfico poco cohesionada a convertirse en un elaborado sistema de patronaje utilizado para distribuir la riqueza del tráfico de drogas entre quienes, en los ojos de Maduro, son necesarios para mantener la estabilidad del régimen.

Al igual que Chávez, Maduro sabe que debe mantener a los militares de su lado si quiere seguir siendo presidente. Pero, a diferencia de su antecesor, Maduro no tiene dinero para pagarles: el colapso de la economía venezolana ha hecho que los salarios de los militares rasos caigan a menos de **US\$20 al mes**.

Adicionalmente, el ejército ha permanecido más cerca del hombre que esperaba suceder a Chávez y que ha liderado una facción rival dentro del chavismo desde que esos sueños se desvanecieron: Diosdado Cabello.

Así pues, Maduro tuvo que encontrar una manera de pagarles a sus soldados y comprar el apoyo de los comandantes del ejército, al tiempo que restringía la capacidad de los generales para acrecentar su poder personal, de manera que no se convirtieran en una amenaza para el mandatario. El narcotráfico ha sido central para lograr esto.

“No hay un Cartel de los Soles, porque un cartel no podría sostener todos los ‘soles’”.

Bajo el mando de Maduro el poder ha sido dispersado mediante la inversión de la jerarquía militar tradicional. Mientras que antes era muy raro alcanzar el rango de general y convertirse en un “sol”, hoy en día el ejército venezolano cuenta con unos 2.000 generales, **según autoridades militares estadounidenses**.

“La estructura militar tradicional es una pirámide: a medida que uno asciende, se vuelve más delgada. Pero aquí promueven a todos, no hay restricciones para los ascensos”, dijo a InSight Crime un exgeneral que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Ascender al rango de general ofrece acceso a lucrativos puestos en las regiones, que a menudo son más codiciados que los rangos superiores del alto mando militar.

“Los altos cargos [militares] se otorgan a quienes son leales al jefe”, afirmó el exgeneral. “Son ubicados en puestos desde donde pueden manejar negocios sucios, como las regiones fronterizas de tráfico de drogas”.

Estos puestos regionales se asignan según un sistema ideado por Chávez en 2009 y expandido por Maduro. El ejército venezolano está dividido en un mosaico de **unidades geográficas**, que, según fuentes locales de todo el país, sirven como centros de coordinación para la participación del ejército en las economías criminales.

Tanto las posiciones de mando como los rangos inferiores cambian cada año, lo que permite distribuir el acceso a las ganancias criminales entre las fuerzas armadas, al tiempo que los militares se mantienen subordinados a los poderes políticos que determinan esos puestos.

“No hay un Cartel de los Soles, porque un cartel no podría sostener todos los ‘soles’”, afirmó Sebastiana Barráez, periodista venezolana especializada en temas castrenses. Lo que hay son militares que están involucrados en el narcotráfico debido a los cargos que ocupan en determinado momento”.

Un nuevo cartel para un nuevo comercio de cocaína

El hecho de que se haya pasado de células traficantes incrustadas en el ejército a un sistema de narcotráfico donde el ejército es una pieza de muchas refleja los cambios en el comercio de cocaína. Los todopoderosos carteles del pasado han quedado en la historia, y actualmente la mayor parte del tráfico de drogas es realizado por redes ad hoc que son conformadas para cada tarea y luego son disueltas.

En Venezuela esto significa que el universo de unos pocos traficantes respaldados por pesos pesados del Cartel de los Soles se ha fragmentado en una multitud de redes de transporte, pandillas territoriales y narco-intermediarios. Incluso el rol de las FARC se ha atomizado, luego de la desmovilización del grupo en 2017, lo que ha dejado un vacío de poder que ha sido llenado por varios grupos disidentes de las FARC y el ELN.

Tanto en el ejército como en el hampa, los rostros de quienes trafican cocaína cambian constantemente, pero el sistema sigue siendo el mismo. Todos conforman lo que el investigador venezolano Maibort Petit denomina una “red de redes”, en la que las drogas pasan por las manos de varios intermediarios, tanto militares como criminales, a medida que atraviesan el país.

En algunas regiones, especialmente en aquellas con redes de tráfico con conexiones cercanas al Estado, el ejército, según dicen las fuentes, se ha distanciado del narcotráfico como tal y ahora solo **recibe los pagos** de los traficantes autorizados. En otras, las **células militares continúan transportando los cargamentos**, e incluso las dos modalidades se suelen entrecruzar.

En el estado Apure, en la frontera occidente del país, las drogas ingresan a Venezuela a través de cruces fronterizos clandestinos controlados por las ex-FARC y el ELN. Desde allí, las cargas se salen en avionetas o se transportan por el país hasta la costa.

La participación de los militares depende de la ruta que tomen las drogas, según contó a InSight Crime un exlíder político chavista. Las ex-FARC manejan los vuelos directamente con compradores o intermediarios, y les pagan a los militares por el derecho a operar.

“Las FARC le pagan al gobierno por cada ‘kilo despegado’ y este pago va a ‘los generales’”, dijo.

Sin embargo, las drogas que continúan su camino por el interior de Venezuela son transportadas por una célula militar de tráfico, afirmó.

“Un coronel del ejército controla las rutas terrestres”, señaló. “Tiene una concesión de carga del gobierno y el ejército deja que sus camiones pasen por los puestos de control”.

En el estado caribeño de Falcón, un pescador que ha trabajado para narcotraficantes, que pidió permanecer en el anonimato, tiene una historia similar.

“Muchas veces la mercancía es traída a la costa en camiones de la Guardia Nacional”, dijo.

Los cargamentos son entregados a pescadores contratados por grupos como los carteles de Paraguaná y Guajira, los cuales luego cargan la droga en sus lanchas y zarpan hacia las islas del Caribe. Su paso está garantizado por pagos a las unidades de la GNB responsables de patrullar los territorios marítimos de Venezuela.

“No los vemos, todo lo que sabemos es que por la noche hay paso libre, no hay nadie por ahí”.

Su relato fue corroborado por un agente de la GNB en Falcón, quien habló con InSight Crime bajo la condición de anonimato.

“Hay que trabajar para estas personas [narcotraficantes] y quedarse callado porque de lo contrario uno termina en [la prisión militar] Ramo Verde”, afirmó.

Si bien gran parte de la cocaína exportada desde Venezuela es ahora transportada por grupos criminales que utilizan avionetas clandestinas o pequeñas embarcaciones, el control de puertos y [aeropuertos](#) también sigue siendo una parte clave de la participación de los militares en el tráfico de drogas.

“La administración del puerto de Puerto Cabello está en manos de los militares y es allí donde transitan la mayoría de las drogas”, dijo a InSight Crime un exfiscal del estado Carabobo, que pidió no ser citado por motivos de seguridad.

Los operadores del poder

Si bien el tráfico de cocaína en el ejército se ha institucionalizado, el papel de los “jefes del cartel” identificados por los investigadores estadounidenses está hoy rodeado de incertidumbre.

Dos de los personajes más importantes para el Cartel, el exgeneral del ejército Clíver Alcalá y el exdirector de espionaje Hugo Carvajal, se han vuelto contra el régimen de Maduro, y Alcalá incluso [trató de derrocar al gobierno](#) contratando mercenarios para un golpe de estado. Carvajal se encuentra preso en España, donde ha presentado recursos para impedir la extradición a Estados Unidos, mientras que Alcalá está preso en Estados Unidos [en espera de ser juzgado](#) por cargos de narcotráfico.

Diversas fuentes de las regiones de Venezuela continúan insistiendo en que “los soles” son algunos de los dueños de los cargamentos de droga que ven pasar. Sin embargo, hay poca evidencia para conectar los alijos directamente con los presuntos jefes del cartel.

Actores como Diosdado Cabello, Tareck el Aissami, Néstor Reverol y el propio presidente Maduro parecen mantener una distancia segura de cualquier cargamento de drogas.

Varias fuentes afirman que estos altos mandos han encontrado formas menos directas de beneficiarse del tráfico de drogas, como comprar tierras o propiedades mediante testaferros, para luego alquilarlas a redes de tráfico que las utilizan para despachar o almacenar drogas. Pero la manera experta en que los chavistas usan testaferros y los oscuros registros de tierras y negocios de Venezuela hacen que estas afirmaciones sean casi imposibles de verificar.

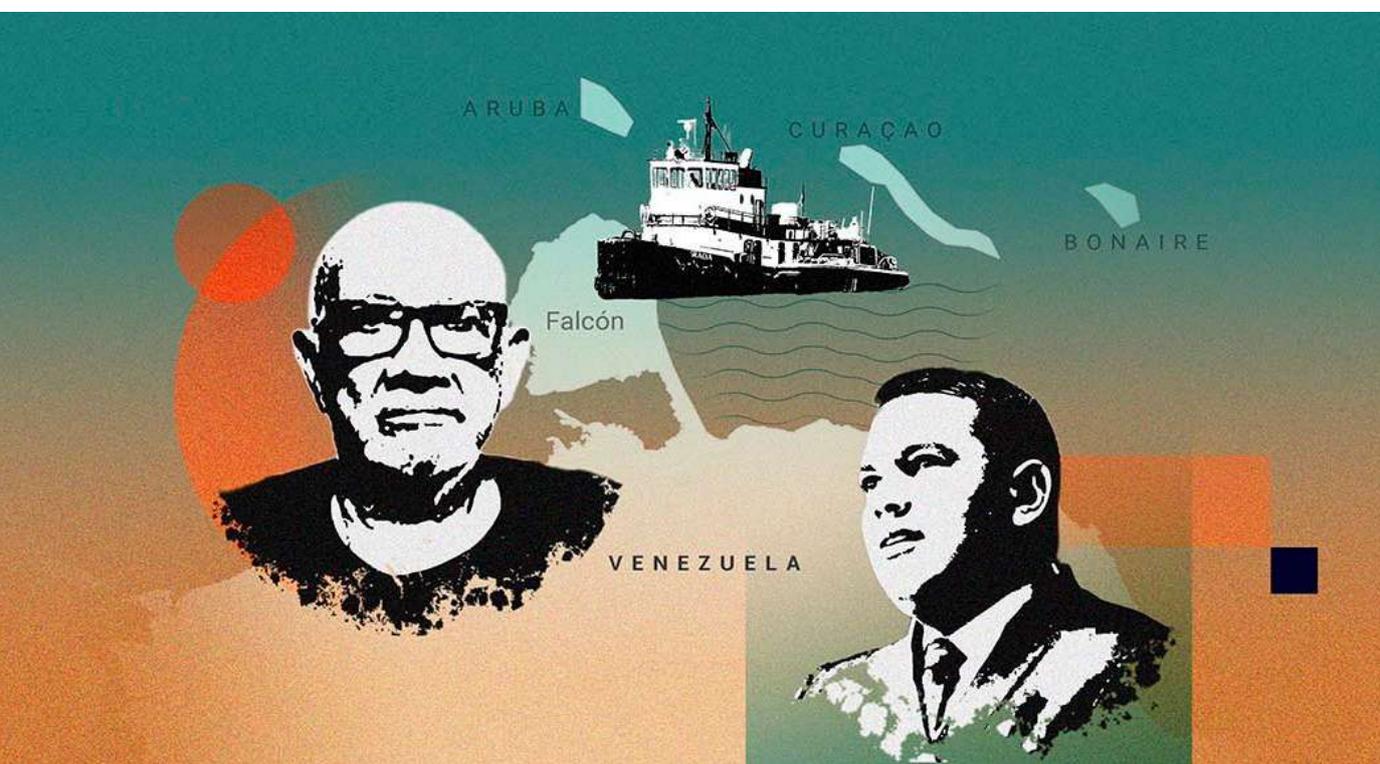
Su papel principal, sin embargo, consiste en garantizar que el sistema de narcotráfico funcione en beneficio del régimen, ubicando personal corrupto y leal en posiciones políticas y militares estratégicas. Hoy en día, cada posición de mando en el narcotráfico está de alguna manera relacionada con uno de los “líderes” del Cartel de los Soles.

Si bien varias fuentes especulan que estos actores reciben una parte de las ganancias del tráfico a cambio de este patrocinio, analistas y exmilitares que hablaron con InSight Crime enfatizaron que los ingresos de la droga juegan un papel subordinado en el sistema del Cartel de los Soles, apuntalando el edificio estatal, después de que la élite chavista lo desangró con la corrupción.

La evidencia sugiere que algunos, si no todos estos actores, han pasado de ser negociantes de cocaína a agentes de poder, que usan su posición no para traficar drogas, sino para administrar el sistema de narcotráfico en el que se ha convertido el Cartel de los Soles. “El régimen facilita todos los elementos: la seguridad, las conexiones con los actores militares y civiles locales, el transporte administrado por el gobierno, los alcaldes, gobernadores, representantes, los directores de aeropuertos, aduanas, todo lo que es necesario [para el narcotráfico]”, afirmó el líder político exchavista.

4

El cartel de Paraguaná: narcotráfico y poder político en Venezuela



El 3 de abril de 2021, la policía del estado de Anzoátegui, al este de Venezuela, respondió a un [aviso](#) para interceptar un Toyota Corolla plateado. Interrogaron a la conductora, una mujer de mediana edad acompañada de un pariente joven. Bajo la presión de las autoridades, la mujer los llevó a un edificio residencial donde vivía su padre, un hombre corpulento, de pelo ralo, casi en la setentena.

El hombre afirmó que era un ciudadano ordinario; presentó un documento de identidad con el nombre de Ramón Guillermo Valera. Pero después de un interrogatorio, admitió que el documento era falso. Su verdadero nombre era Emilio Enrique Martínez, más conocido como “Chiche Smith”, uno de los narcos más notorios de la costa Caribe de Venezuela.

La captura de Martínez conmocionó al país entero. Su arresto marcó la caída de uno de los narcotraficantes más veteranos de Venezuela, cuyas conexiones con actores poderosos dentro del estado parecían ponerlo fuera del alcance de la justicia.

La historia del Cartel de Paraguaná de Martínez es el ejemplo perfecto de la profunda sinergia entre la política y el narcotráfico en Venezuela. Su ascenso es un caso de estudio sobre cómo las conexiones entre narcotraficantes y políticos locales, así como las fuerzas de seguridad y personajes de influencia nacional, pueden formar la base de sistemas enteros de gobernanza criminal. Su caída permite entender cómo las diferencias entre facciones en los más altos niveles del estado venezolano pueden ocasionar el desmoronamiento de esos imperios criminales.

Un feudo criminal en el Caribe

Martínez ha sido una figura legendaria en Paraguaná, la península que sobresale en el mar Caribe desde el estado costero de Falcón. Hijo de un traficante local, comenzó su carrera como miembro de una de las muchas mafias que trasegaban mercancías de contrabando desde Falcón a las islas cercanas del Caribe Neerlandés en la década de 1990.

Fue a prisión en 1998, pero recuperó su libertad [seis años después](#). Para ese momento, tenía la mira puesta en productos más lucrativos. En 2010, “Chiche Smith” fue nombrado en [expedientes judiciales](#) como el dueño de 600 kilos de cocaína incautados de una lancha frente a la costa de Falcón.

Según periodistas y líderes políticos locales, entre sus compradores se encontraba el Cartel de Sinaloa de México y entre sus [socios comerciales](#) se contaba [Walid Makled](#), quien era uno de los intermediarios de drogas más conocidos y bien conectados de Venezuela. Sin embargo, Martínez prefería mantenerse a la sombra.

En 2017, Víctor Clark fue elegido gobernador de Falcón y todo cambió. Joven y ambicioso, Clark fue catalogado por los analistas políticos como el acólito del presidente Nicolás Maduro, pero su campaña también contó con el [respaldo personal](#) de Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, quien muchas veces ha competido con Maduro por el poder dentro del chavismo.

Clark celebró su victoria electoral con un fastuoso concierto en la ciudad costera de Cabo San Román, en la punta de la península de Paraguaná. Los habitantes locales relataron a InSight Crime que no se escatimó en gastos, con camiones llenos de cerveza y pirotecnia espectacular. Pero eso no fue lo único que llamó la atención.

“Toda la familia de Chiche Smith estaba allí como invitados de honor y protegidos por soldados”, le comentó a InSight Crime una periodista local, con reserva de su identidad para cuidar su seguridad. Otros residentes confirmaron su versión.

Poco después de la fiesta, [se fotografió a Clark](#) con parientes de Martínez en eventos públicos. Chiche Smith se había convertido en figura pública.

Martínez no tardó en volverse un personaje querido en Paraguaná. Los locales relatan cómo empezó a comprar propiedades en el municipio de Carirubana, pagando generosamente en efectivo por chozas en la playa, con la promesa de construir un resort turístico.

También invirtió dinero a manos llenas en la zona por medio de su [Fundación Carmen Virginia Martínez](#), que llevaba el nombre de su difunta madre. La fundación distribuía alimentos y juguetes entre familias de bajos recursos, organizaba obras públicas, como limpieza de calles, ofrecía empleos bien pagos y renovaba la infraestructura local, algunas veces en [cooperación abierta](#) con el alcalde de Carirubana, Alcides Goitía.

Sin embargo, según numerosos residentes, periodistas, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad del lugar, que hablaron con InSight Crime, las comunidades de Paraguaná no fueron los únicos beneficiarios de la generosidad de Martínez.

“Cuando entra un nuevo comandante, se reúne con esa gente y empiezan a trabajar juntos”.

“Víctor Clark permitió que los narcotraficantes hicieran mejoras y modificaciones [en la zona] y luego el gobierno regional las inauguraba como si fueran obras públicas”, señaló un oficial del ejército local, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

“Los comandos [del ejército] también recibieron provisiones, teléfonos, logística para actividades deportivas [de Martínez]”, agregó.

No obstante, la colaboración de Chiche Smith con Clark tuvo dos caras.

“El Cartel de Paraguaná sabe todo sobre todos, así que uno presta atención cuando ellos aconsejan no votar contra Víctor Clark o hablar mal de él, porque ellos saben dónde vives”, le explicó a InSight Crime un residente que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.

A cambio, Martínez esperaba una cosa: carta blanca para el trasiego de narcóticos por el territorio de Falcón.

Para hacerlo, requería la complicidad de las fuerzas de seguridad.

“[Chiche Smith] y su familia se reúnen con todos los comandantes [del ejército]”, relató un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato. “Cuando entra un nuevo comandante, se reúne con esa gente y empiezan a trabajar juntos”.

Esas relaciones se ven facilitadas por el gobernador, según afirmó otro oficial del ejército en intercambio con InSight Crime, quien también que se mantuviera su anonimato.

“Como cabeza del estado, [Víctor Clark] es el intermediario”, comentó. “Él no participa, pero permite que todo pase”.

Varias fuentes también sostuvieron que la política influye en la designación de la cabeza de los puestos de mando del ejército en la región y que Clark lleva años moviendo hilos para influir en ese proceso.

“Los cambios de mandos militares, sobre todo a nivel estatal, son acciones políticas”, señaló el oficial de la GNB. “Las personas en esos cargos son más políticos que militares, y para llegar a ese nivel hay que estar bien conectado”.

Narcotráfico y política local

La estrecha red de conexiones entre Martínez y el gobierno local, el ejército y la población de Falcón crearon una forma de gobernanza criminal muy singular, un feudo narco donde políticos y fuerzas de seguridad se aliaron con actores criminales para usar las ganancias ilícitas, no solo para su enriquecimiento personal, sino también para mantenerse en el poder.

Con el deterioro progresivo de la situación económica, política y social de Venezuela, esos acuerdos han proliferado por todo el país y juegan un rol crucial tanto en el respaldo al estado venezolano como para garantizar que se mantenga el flujo de drogas.

“El crimen trabaja con la política; toma control de las gobernaciones”, comentó un exagente antinarcóticos venezolano, quien habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera reserva de su identidad por razones de seguridad. “Y convierte esas gobernaciones en centros del crimen organizado”.

En el nivel más básico, la relación entre la política y el narcotráfico en Venezuela se basa en la mediación de la relación entre las fuerzas de seguridad y algunos criminales protegidos. Los gobernadores y alcaldes tienen cierto control sobre las actividades y determinan el liderazgo de los entes de policía estatales y municipales, ejercen influencia en los nombramientos del ejército regional y coordinan con las fuerzas armadas los temas de seguridad.

Mediante el ejercicio de estas facultades para instalar y manipular a agentes de seguridad corruptos, los políticos locales no solo pueden garantizar la impunidad para ciertos traficantes que gozan de su favor, sino que también garantizan la lealtad de las fuerzas de seguridad permitiéndoles lucrarse del flujo de narcóticos.

Los mismos políticos pueden ser beneficiarios de esos dineros corruptos, aunque es muy difícil rastrear los pagos directos. Sin embargo, la sinergia entre la política local y el crimen organizado en Venezuela va más allá de las simples coimas.

Como lo demuestra el caso del Cartel del Paraguaná, los políticos estatales y municipales pueden llegar a depender de los narcotraficantes para obtener respaldo político, mediante la financiación de campañas, sus votos, o los servicios públicos que los gobiernos locales, casi en bancarrota, no pueden suministrar.

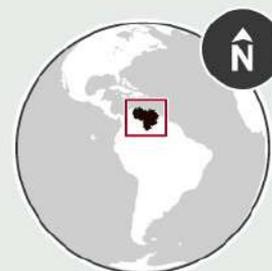
Un gran número de fuentes, desde fiscales hasta líderes políticos locales, todos declararon en condición de anonimato, y describieron a InSight Crime los numerosos servicios que los políticos locales proveen a los narcotraficantes. Entre ellos se contaba usar **su influencia** sobre las fuerzas de seguridad para **dirigir operativos** contra rivales criminales y hacer lobby con las instituciones judiciales para blindarlos contra la judicialización. También pueden incluir el uso de sus facultades administrativas para facilitar el tráfico de drogas, como la emisión de licencias y autorizaciones de transporte o el otorgamiento de concesiones que permitan el acceso a infraestructura de transporte, como los puertos.

En las docenas de entrevistas que se realizaron en el marco de esta investigación, InSight Crime escuchó denuncias que implicaban a los gobernadores actuales o recientes en más de la mitad de los 23 estados venezolanos, así como a alcaldes municipales, diputados de la Asamblea Nacional y otros servidores públicos. Aunque la mayoría de las acusaciones sigue sin verificar y varias fueron poco más que rumores, existe evidencia más que suficiente que muestra que las acusaciones por narcotráfico no son obstáculo para hacer una carrera política en Venezuela.

Entre las denuncias más persistentes se contaron las instauradas contra Ramón Carrizales, exvicepresidente y ministro de defensa, quien fue gobernador del estado venezolano de Apure, en la frontera con Colombia, por más de diez años hasta que perdió su cargo antes de las elecciones locales en noviembre de 2021.

Varias figuras del chavismo han **señalado** al hijo de Carrizales de trabajar para el narcotraficante Walid Makled, al igual que su esposa, quien **trabajó** en la empresa Almacenadoras, de Makled, mientras fungía como ministra de ambiente. En Apure, por otro lado, numerosas fuentes, incluidos expertos en drogas, periodistas, residentes y políticos locales de ambos extremos del espectro político, acusaron a Carrizales de presidir una “zona franca” para el narcotráfico a favor de grupos guerrilleros aliados y sus clientes, los carteles.

Lealtades políticas de gobernadores en estados narcotraficantes clave



Otros gobernadores y exgobernadores han sido señalados de proteger a grupos guerrilleros que trafican narcóticos en Venezuela. Las [autoridades estadounidenses han sancionado](#) a los exgobernadores Henry Rangel Silva, exgobernador del estado Trujillo, y a Ramón Rodríguez Chacín, exgobernador de Guárico, así como al actual [gobernador de Táchira Freddy Bernal](#) por esas denuncias.

Además, varios gobernadores han sido investigados por autoridades internacionales por denuncias de narcotráfico, incluido el exgobernador de Barinas, Adán Chávez, y la gobernadora de Delta Amacuro, [Lizeta Hernández](#), a quienes la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, les ha abierto investigaciones, según reportes de prensa.

Varios casos recientes también han puesto en evidencia la participación de alcaldes municipales y diputados de la Asamblea Nacional. A comienzos de 2022, un alcalde de Zulia, un diputado por Falcón y otro por Táchira [fueron capturados en posesión de cocaína](#), al parecer de una célula traficante que según las fuentes tenía nexos con el Cartel de Paraguaná.

Un agente de las fuerzas de seguridad conocedor del caso, y quien habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato, señaló que la red traficante pagó a los políticos para transportar narcóticos pensando que era improbable que detuvieran vehículos oficiales.

Sin embargo, a pesar de la proliferación de relaciones entre las autoridades locales y el narco, estas conexiones políticas también son frágiles y mutables, como lo descubriría Chiche Smith.

La caída de Chiche Smith

El 15 de abril de 2020, comandos de la GNB y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) allanaron varias propiedades vinculadas a Emilio Martínez en Falcón y el vecino estado de Carabobo. En 20 allanamientos durante los siguientes cuatro días, [incautaron](#) seis propiedades y once vehículos, e hicieron al menos 20 capturas.

Los indignados residentes de Paraguaná salieron a las calles a protestar.

“Entraron a la fundación y se robaron todo”, informó un manifestante a [Primer Informe](#). “Queremos una explicación”.

Las semanas siguientes traerían algunas explicaciones, pero también más preguntas. En junio, la ONA presentó [acusaciones por narcotráfico](#) contra Martínez y siete de sus cómplices, por lavado de ganancias del narcotráfico por medio de la Fundación Carmen Virginia Martínez.

De repente hubo un intenso escrutinio no solo sobre Chiche Smith, sino también sobre sus conexiones con el estado. Y estas iban más allá de Víctor Clark.

Entre los detenidos se contaron dos agentes de policía del estado de Carabobo —Raúl Roberto de Gallego Salas y Orlando José Silva Moreno— a quienes se acusó de colaborar con el despacho de cargamentos de cocaína del Cartel de Paraguaná desde Puerto Cabello, en Carabobo.

Fuentes de la policía y [fotografías](#) dan cuenta de que ambos tenían vínculos cercanos con el gobernador de Carabobo Rafael Lacava y su jefe de seguridad

José Domínguez, y que habían asistido a eventos con altos mandos de la política venezolana, como el fiscal general Tarek William Saab, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Douglas Rico, y el alcalde del municipio de Miranda, Pablo Acosta.

Tanto Rico como Lacava negaron cualquier delito, pero el exjefe de la policía de Carabobo Salvatore Luchesse declaró lo contrario.

“Detenido en Venezuela, el gobierno puede dar rodeos con el caso hasta que la gente se olvide de él”.

“El cargamento que salió de Puerto Cabello fue autorizado por Rafael Lacava y supervisado personalmente por ‘El Portu’ José Domínguez”, [escribió en Twitter](#). Tanto Domínguez como el director de la policía de Carabobo se vieron [obligados a presentar su renuncia](#) a raíz del escándalo.

Luchesse también alegó que las operaciones contra el Cartel se desataron por una agudización de las tensiones entre las facciones políticas divergentes en el chavismo que surgieron desde la muerte, en 2013, de la figura unificadora que fue el presidente Hugo Chávez.

“Lo que viene ocurriendo en Valencia [capital de Carabobo] en los últimos tres días es una guerra por el poder entre las bandas de Rafael Lacava y Diosdado Cabello” sostuvo en [otro tuit](#).

Las declaraciones de varios residentes, periodistas, miembros de las fuerzas de seguridad locales y antiguos empleados de la familia Martínez, apuntaron a la misma situación. En diálogo con InSight Crime todos insistieron en que las medidas tomadas contra Martínez redpondieron a un intento del presidente Nicolás Maduro para mantener las operaciones de Martínez, que habían sido fuente de conflictos entre las facciones políticas locales, bajo control.

Asimismo, declararon que las fuerzas de seguridad le habían permitido a Martínez huir, y que este regresaría una vez se hubieran calmado las cosas. Sin embargo, en ese punto, estaban equivocados. Un año después, Martínez fue arrestado en Anzoátegui.

En Paraguaná, las redadas y la posterior captura de Martínez trastocaron lo que parecía ser un orden bien establecido.

“Es como un triángulo: Maduro le ordena al ejército que obedezca las órdenes del gobierno regional y el gobierno regional nos ordena que protejamos y cuidemos a esas personas [del Cartel de Paraguaná]”, le comentó un agente antinarcóticos local a InSight Crime, hablando bajo la condición de anonimato.

“Entonces cuando nos dijeron que los capturáramos, nos sentimos mal, porque esas personas nos permitieron dejar de pasar necesidades”.

Las razones del repentino revés de fortuna de Martínez siguen siendo un misterio.

Una teoría es que Martínez fue perseguido para impedir que se sometiera a la DEA y entregara información comprometedor contra funcionarios del gobierno venezolano.

“Si Chiche fuera capturado por la DEA, rodarían muchas cabezas por narcotráfico, desde soldados hasta alcaldes y gobernadores”, comentó un agente de la policía de Falcón a InSight Crime, bajo la condición de anonimato por motivos de seguridad. “Detenido en Venezuela, el gobierno puede dar rodeos con el caso hasta que la gente se olvide de él”.

Otras fuentes creen que la detención estuvo relacionada con el decomiso de un cargamento de cinco toneladas de cocaína en un barco frente a la costa de Aruba, lo que dañó aún más la imagen del gobierno frente a la comunidad internacional y atrajo atención no deseada hacia la salida de droga desde Paraguaná.

“El gobierno de Maduro dio la orden de arrestarlo para mostrar que en el país se combate el narcotráfico”, dijo otro agente de la GNB, quien también solicitó que no se divulgara su nombre.

Drogas y el balance de poder

Aunque las fuentes consultadas tenían distintas teorías sobre la captura de Martínez, todos coincidían en que la decisión debía haber venido de los más altos niveles del estado venezolano. Chiche Smith se había convertido en un peón en un juego que se extendía mucho más allá de Paraguaná, en el que se usa el acceso a las ganancias del narcotráfico para comprar, balancear y romper las lealtades políticas en un estado sumido en pugnas internas.

La principal fractura del chavismo está entre el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes han competido por influencia en el partido desde que ambos reclamaron el derecho a suceder a Hugo Chávez en la presidencia, y formaron polos de poder rivales. Otros pesos pesados chavistas también mantienen pequeñas facciones, como el ex vicepresidente y actual ministro de hidrocarburos Tareck El Aissami, mientras que otros, como el gobernador Lacava en Carabobo actúan como agentes libres sin bando.

“[Estas facciones] evolucionan, se conectan o chocan entre sí”, como le explicó a InSight Crime un analista político venezolano, quien tampoco quiso que se divulgara su nombre, por razones de seguridad.

Varios analistas y antiguos políticos chavistas describieron a InSight Crime cómo la fuerza de estas facciones en gran medida está determinada por su

capacidad de canalizar recursos para los partidarios del régimen y mantenerlos en cargos estratégicos en el ejército y la política.

Dentro del estado venezolano el tráfico transnacional de cocaína es una de las pocas fuentes de efectivo que quedan para impedir la quiebra. Así pues, para esas facciones el control de las zonas claves para el narcotráfico se traduce en poder político.

En 2021, con las elecciones regionales de noviembre, el mapa del poder político en estas zonas se redibujó, y el principal ganador fue el presidente Maduro.

Los aliados de Diosdado Cabello perdieron la gobernación de Apure frente a un partidario de Maduro, y la gobernación del estado de Zulia, en la frontera con Colombia, fue para la oposición, lo que cierra un año en el que la influencia de Cabello ha sufrido una serie de golpes en los campos político y militar.

“La gente [de Chiche] sigue moviendo de todo y los euros siguen llegando”.

Las elecciones también dieron una serie de victorias a los partidarios de Maduro, dejando a esta facción al mando de muchos de los estados importantes para el narcotráfico en Venezuela.

“Maduro sigue controlando la situación, al menos por ahora, y creo que con las elecciones ganó mayor control sobre el proceso”, declaró a InSight Crime un politólogo, que solicitó reserva de su identidad. “Pero el gobierno tiene un interés en mantenerse en el poder; pueden pasar por alto sus diferencias internas si esas diferencias amenazan su permanencia en el poder”.

Entre los ganadores de las elecciones de noviembre de 2021 está Víctor Clark, cuya trayectoria política no se vio afectada por el escándalo de Chiche Smith.

Y, al menos por el momento, gobierna un estado donde el Cartel de Paraguaná sigue traficando narcóticos, aunque Chiche Smith esté en prisión.

“La gente [de Chiche] sigue moviendo de todo y los euros siguen llegando”, comentó un pescador de Paraguaná, que también teme por su seguridad si se revela su nombre.

Independientemente de que la red de Chiche Smith siga operando con autorización de Clark o no, conserva su capacidad para corromper a las autoridades.

“Aún hay muchos [políticos y miembros de las fuerzas de seguridad] que colaboran con esas personas”, dijo uno de los agentes de la GNB.

“Por supuesto que hay interés en trabajar con ellos”, añadió. “¿De dónde más sacaría dinero un soldado para tener haciendas, camionetas, casas, negocios y todo lo demás?”

5

Gordito González y los narcooperadores de Venezuela



En 2016, dos sobrinos adoptivos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron declarados culpables de una conspiración para llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Sus jactanciosas afirmaciones de que las ganancias de la droga servirían para financiar la campaña política de la primera dama, Cilia Flores, llegaron a los titulares internacionales.

Los “narcosobrinos”, como se les denominó, se convirtieron en símbolos de la nueva, adinerada y corrupta oligarquía de Venezuela. Pero mientras los titulares se centraban en la élite política de Venezuela, el importante papel que desempeñaron los intermediarios que les conseguían la cocaína a dicha élite se perdió en el ruido mediático.

Uno de esos intermediarios era conocido con el alias de “El Gocho”. Este tenía acceso a proveedores colombianos de cocaína, a la primera familia de Venezuela y, según afirman los fiscales, a los carteles mexicanos. Sin embargo, ni siquiera los hermanos Flores, que basaron toda su operación en la capacidad de El Gocho para obtener la cocaína, sabían su nombre real.

La trama se hace aún más compleja después de que los fiscales dieron a entender que la operación de drogas de los sobrinos con El Gocho tenía un negocio secundario: liberar de la cárcel al narcotraficante Hermágoras González Polanco, alias “Gordito González”. Si bien El Gocho era un personaje desconocido, Gordito González era un conocido narcotraficante con un largo historial y un perfil en antinarcóticos a nivel internacional.

Gordito González no podía producir su propia cocaína, no tenía la infraestructura para transportarla. Al parecer, se encontraba en una prisión venezolana. Sin embargo, el trato de los sobrinos Flores con El Gocho indica que Gordito González había encontrado un nuevo papel de bajo perfil, aunque central, en el negocio de las drogas. Incluso desde su celda, podía actuar como un intermediario entre las personas adecuadas y tenía la capacidad de conectarlas, tendiendo puentes entre ellas: era un narcooperador venezolano.

En la evolución del tráfico transnacional de drogas de Venezuela ha habido varias generaciones de operadores que gestionan las relaciones entre las partes interesadas y establecen conexiones entre proveedores, transportistas y compradores de cocaína, así como con los actores estatales corruptos involucrados en el tráfico de drogas.

Gordito González ha estado presente en todo este proceso, evolucionando para asegurarse de tener siempre un papel en el cambiante panorama del narcotráfico en Venezuela. Ha logrado mantenerse a flote, en tanto que sus compañeros, rivales, y sucesores han sido encarcelados o han desaparecido.

Y en la nueva era del narcotráfico de Venezuela, definida por las crisis políticas, sociales y económicas del periodo de Maduro, Gordito González sigue siendo uno de los mayores operadores del país, asegurándose de obtener ganancias para los actores estatales corruptos que regulan y facilitan el tráfico transnacional de cocaína en Venezuela.

La batalla de los operadores

Gordito González nació en una familia de la población indígena binacional Wayuu en el departamento de La Guajira, al noreste de Colombia, una zona que tradicionalmente ha sido utilizada para el contrabando y que Pablo Escobar y su Cartel de Medellín convirtieron en un importante punto de salida de cocaína en la década de los ochenta.

Se inició en el tráfico de drogas a finales de los noventa, cuando se asoció con Salomón Camacho Mora, quien había sido narcotraficante del Cartel de

Medellín y, según autoridades estadounidenses, también tenía conexiones con los carteles de Cali y el Norte del Valle. Gordito González y Camacho fundaron el Cartel de la Guajira.

Una acusación de Estados Unidos contra ambos hombres en 2005 señala que Camacho compraba cocaína en laboratorios de procesamiento en Colombia y la contrabandeaba a través de la frontera. Una vez llegaba a Venezuela Gordito González recibía y almacenaba los cargamentos, para luego enviarlos por mar a Puerto Rico y Estados Unidos. Según la acusación, ambos hombres abastecían a compradores en Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico.

Desde el principio, Gordito González cifró su éxito en su capacidad no solo para mover drogas, sino también para construir redes.

“El Cartel de la Guajira tuvo un papel importante aquí en Venezuela porque tenía las mejores conexiones con todos los pequeños capos del país”, declaró Mildred Camero, quien en el momento del ascenso del cartel era la principal oficial antidrogas de Venezuela, como presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid).

Sin embargo, los capos criminales no fueron los únicos que impulsaron el auge de la cocaína en Venezuela; también lo hicieron los elementos corruptos del Estado. Estos funcionarios corruptos pasaron de aceptar sobornos para dejar pasar los cargamentos de cocaína, hasta facilitar activamente e incluso participar de manera directa en el tráfico de drogas. Esas redes fluidas y porosas fueron lo que se denominó en su conjunto el Cartel de los Soles.

Para sobrevivir en esta nueva frontera de la cocaína, los traficantes necesitaban tres cosas: acceso al suministro de cocaína en Colombia -proporcionado principalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-, relaciones con compradores que abastecen los mercados estadounidenses y europeos, y finalmente conexiones con las redes del Cartel de los Soles para garantizar el paso de los cargamentos sin ningún obstáculo.

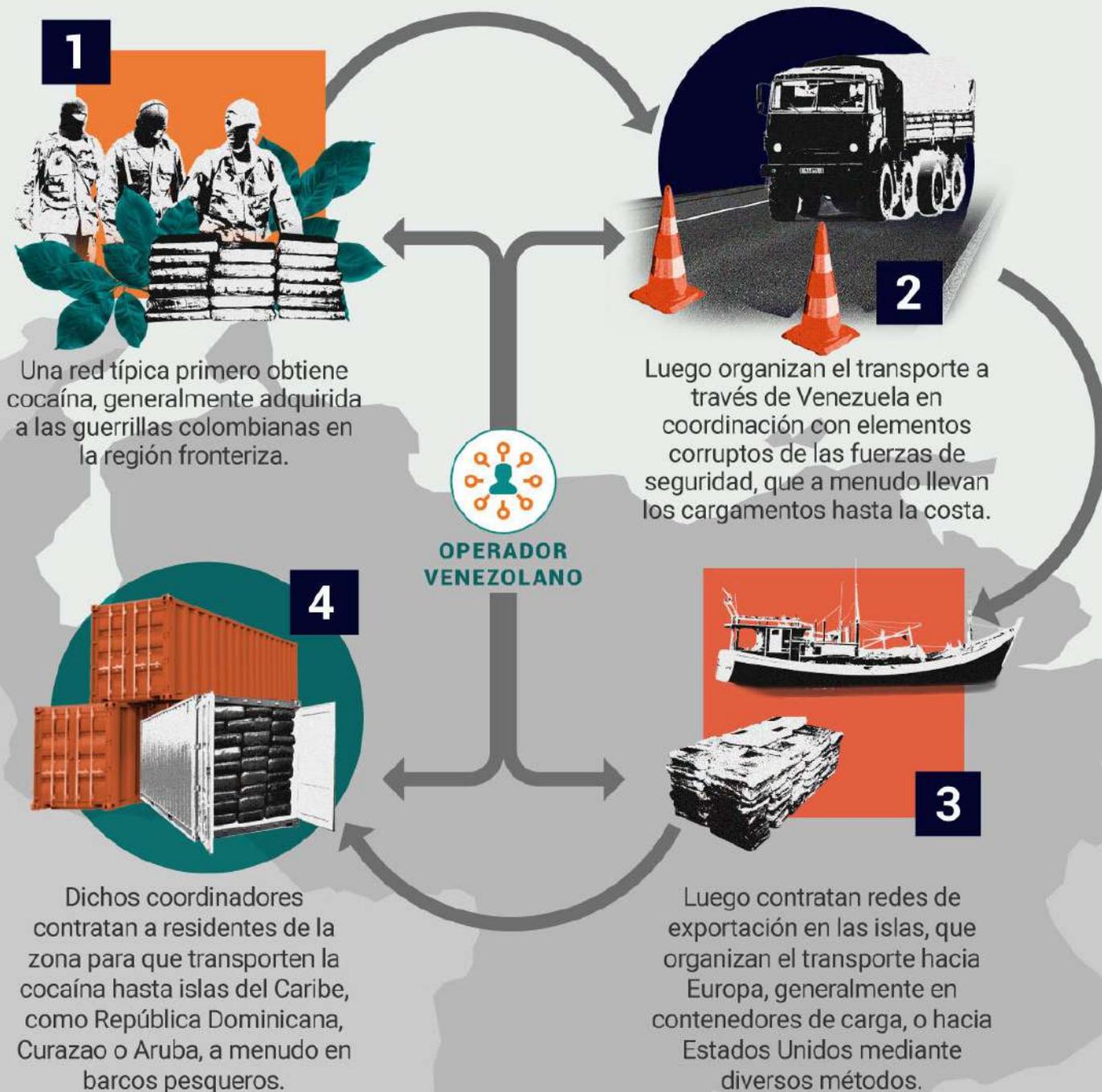
La mayoría de los que podían cumplir con estos requisitos eran grandes traficantes colombianos, como Daniel “El Loco” Barrera, el Cartel del Norte del Valle y el Clan Galeano. Sin embargo, el creciente papel de las redes de tráfico insertas en el Estado comenzó a cambiar esta dinámica.

“A medida que avanzaba el gobierno chavista, los venezolanos, sobre todo el ejército, se apoderaron de las rutas, expulsaron a los traficantes [colombianos] de Venezuela y tomaron el control de sus operaciones”, explicó Camero.

Gordito González logró mantener su rol como un actor central en este cambiante entorno volviéndose indispensable para las redes del Cartel de los Soles.

Una red de operadores en el Caribe venezolano

Los operadores de cocaína coordinan y orquestan el flujo de drogas, recurriendo a sus conexiones con cada actor a lo largo de la cadena de suministro. En Venezuela, sus operaciones son más evidentes en la región Caribe.



González Polanco estableció una asociación con uno de los actores más importantes del Cartel de los Soles, Clíver Alcalá, un influyente general del ejército con estrechos vínculos con la élite chavista y, según fiscales estadounidenses, con las FARC. Alcalá se acercó rápidamente al clan de Gordito González, al que se vinculó no solo por negocios, sino también para comenzar una relación sentimental con la sobrina de este, Martha, con quien más tarde se casó.

Gordito González también utilizó su conocimiento del tráfico de drogas por el Caribe para empezar a tender puentes entre las redes del Cartel de los Soles en Venezuela y las islas del Caribe, sobre todo República Dominicana, como señaló Camero.

“El Cartel de la Guajira tenía una base en República Dominicana desde hacía tiempo, por lo que manejaba relaciones con República Dominicana, Haití y otras islas del Caribe”, dijo. “Tenían todas las conexiones, las rutas y los contactos”.

Con el apoyo de Alcalá y sus conexiones en el Caribe, el Cartel de la Guajira se estableció como una de las principales organizaciones de narcotráfico de Venezuela. Pero su agresiva expansión amenazó el negocio del hombre más importante de la primera generación de narcotraficantes de Venezuela: [Walid Makled](#).

El [clan Makled](#), que tenía su base de operaciones en el estado Carabobo, era propietario de la aerolínea Aeropostal, un negocio de almacenamiento en Puerto Cabello, el puerto más grande de Venezuela, y varias empresas fachada. Todo este entramado empresarial fue utilizado por Makled para crear sus propias cadenas de transporte de cocaína. Según afirmó él mismo, luego utilizó sus conexiones con elementos corruptos del ejército de Venezuela y con las FARC para vender el paso seguro de los cargamentos de cocaína a los mejores postores.

Según una investigación de Nuevo Arco Iris, [grupo colombiano de monitoreo de conflictos](#), corroborada por Camero, Alcalá [presionó](#) para que el Cartel de la Guajira tuviera más control sobre las rutas de la cocaína, lo que incluía el uso del principal punto de despacho de Makled: Puerto Cabello. Esta movida enfureció a Makled, quien enardeció su rivalidad con el grupo.

El conflicto atrajo a facciones rivales dentro del régimen de Chávez, cuyos miembros trabajaban con una de las dos partes, o bien con ambas. La rivalidad criminal, que luego se volvió política, cobró la libertad de Gordito González y Makled.

Gordito González fue el primero en caer. [Fue capturado](#) en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad en su finca en el lago de Maracaibo en marzo de 2008, y [condenado](#) a 15 años y 6 meses en una prisión de Caracas.

Pero la aparente victoria de Makled no duró mucho. En noviembre de 2008, Alcalá le ordenó a su unidad militar que asaltara la hacienda de la familia Makled, donde incautaron 400 kilos de cocaína y arrestaron a tres hermanos

de Walid. Hasta el día de hoy, Makled sostiene que la droga fue puesta allí para incriminar a su familia y justificar la redada. Aunque Makled logró huir a Colombia, fue arrestado en 2010 y extraditado a Venezuela, donde fue sentenciado a 14 años de prisión.

El mismo año en que Makled fue arrestado, el socio de Gordito González, Salomón Camacho Mora, fue [arrestado en Venezuela y deportado](#) a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

La siguiente generación

En 2013, Clíver Alcalá cayó repentinamente en desgracia. Después de la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, Alcalá se [retiró](#) de las fuerzas armadas, rompió con el gobierno y huyó a Colombia. Allí desempeñó un papel protagónico en [un intento fallido de derrocar a Maduro](#) mediante un golpe mercenario, después de lo cual se entregó a las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos de narcotráfico.

Cuando Alcalá huyó de Venezuela, muchos traficantes de la primera generación que sacaron provecho del auge de la cocaína en Venezuela ya [habían sido capturados](#). No es claro si estas detenciones fueron el resultado de presiones internacionales, conflictos internos entre las diferentes redes del Cartel de los Soles —como al parecer fue el caso de González Polanco y Makled— o parte de un plan deliberado para eliminar la competencia.

Pero independientemente de las intenciones, los resultados sí quedaron en evidencia. Las FARC [comenzaron a enviar](#) cargamentos utilizando su propia infraestructura de tráfico de drogas en Venezuela —sobre todo pistas de aterrizaje—. Adicionalmente, [algunas redes del Cartel de los Soles](#) presuntamente comenzaron a hacer tratos directamente con los compradores y a enviar sus propios alijos de droga, eliminaron a los intermediarios y aumentaron drásticamente su influencia en el tráfico de drogas.

Sin embargo, esta consolidación del narcotráfico no duraría. Con la muerte de Chávez, y la desmovilización de las FARC cuatro años después, el poder en el Estado venezolano y en el narcotráfico se fragmentó. Hoy en día, en muchas partes del país, la cocaína es traficada por redes cambiantes, compuestas por actores militares y criminales que rotan constantemente y se conforman para enviar un cargamento, para luego disolverse. Por lo tanto, quien pueda encajar las piezas dispersas se convierte en un activo valioso.

En este contexto, una nueva generación de narco-operadores ha asumido este rol, y nuevamente es el Caribe, sobre todo República Dominicana, donde más han avanzado en su cometido.

El tráfico de drogas en República Dominicana ya no es lo mismo que era en los días en que Gordito González convirtió al país en su sede en el Caribe, pero sigue siendo un lugar repleto de oportunidades criminales para las redes de operadores.

La nación isleña se ha convertido en lo que un alto funcionario de seguridad, hablando con InSight Crime bajo condición de anonimato, describió como “abierto a cualquiera”, lo que quiere decir que cualquier país es bienvenido siempre y cuando cumpla las reglas. Sus habitantes son contratados para hacer el trabajo sucio, la élite gobernante gana una parte haciéndose la de la vista gorda, los grupos criminales se comparten las ganancias y respetan el espacio de los demás, y nadie hace demasiado ruido.

“Hay un código de respeto entre los que operan en la región y los habitantes de la misma, porque somos una isla pequeña. Finalmente, cuando aquí hablamos de crimen, nos referimos a un negocio”, dijo a InSight Crime un experto en lavado de dinero y redes criminales, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.

Algunos de los hombres **más visibles** de la nueva generación de República Dominicana eran Carlos José Gascón González y su socio Yoel Palmar, a quien **el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab**, se refirió como el “mayor capo del narcotráfico entre Venezuela y República Dominicana”.

Palmar había estado traficando drogas por República Dominicana **desde al menos 2015**, y había construido **una extensa red de lavado de dinero** en la isla, que incluía inversiones inmobiliarias, concesionarias y otros negocios. El centro de sus operaciones era el lujoso Malecón Palace Casino, que le dio el nombre a su organización, el Cartel del Malecón.

En 2017, la pérdida de un gran cargamento de cocaína llevó a Gascón y al Cartel del Malecón a romper la regla principal del tráfico en el país: la violencia es perjudicial para el negocio.

En junio de ese año, los cuerpos de dos ciudadanos holandeses, Rachid Benbouker y Cuma Ceviz, **fueron encontrados** en una tumba poco profunda en un cañaduzal cerca del distrito de El Seibo, República Dominicana.

La violencia relacionada con el tráfico transnacional de drogas es relativamente escasa en República Dominicana, y el asesinato de los europeos causó conmoción en la isla.

Durante el año siguiente, tanto Yoel **Palmar** como **Gascón** fueron detenidos en relación con el caso. Las autoridades identificaron a seis sospechosos de varias nacionalidades suramericanas y europeas, y Gascón y un ciudadano inglés, Michael Murphy, fueron acusados de planear y ejecutar el asesinato.

Desde que fue arrestado en 2017, Palmar **ha estado detenido** en Colombia, cuyo gobierno **continúa rechazando** las solicitudes de extradición de Venezuela. Gascón fue **detenido** en Santo Domingo en 2018 y, después de ser acusado, **fue puesto en detención preventiva**. Luego desapareció.

Existen rumores de que los contactos de Gascón en República Dominicana lo ayudaron a salir de la detención preventiva, lo que le permitió escapar a Colombia, pero que, una vez allí, fue asesinado en un ajuste de cuentas. InSight Crime no pudo confirmar esta versión, y todo rastro de Gascón se pierde desde 2018.

Si bien el periodo de Gascón y el Cartel del Malecón en la cima del tráfico de drogas del Caribe fue corto, existen señales de que ellos representan la primera generación de narco-operadores venezolanos transnacionales que han sido identificados y eliminados. En los últimos tres años, fuentes de InSight Crime en agencias de seguridad nacionales e internacionales han reportado la presencia de venezolanos que coordinan operaciones de tráfico de drogas en países como Costa Rica, Perú y las islas del Caribe holandés.

Un cartel de contratistas

El caso del Cartel del Malecón tiene una peculiaridad que indica que las conexiones entre la primera y segunda generación de narcotraficantes venezolanos son más que geográficas. Carlos José Gascón González tenía un alias conocido en el mundo criminal: El Gocho.

El verdadero nombre de El Gocho, que había negociado el caso de los narcosobrinos, era Juan Carlos González Contreras, quien es identificado en [documentos judiciales venezolanos](#) como uno de los testaferros de Gordito González, y su nombre aparece en los documentos legales de propiedades y negocios vinculados con el jefe del cartel. Pero todos sus rastros desaparecen a principios de la década de 2010.

Los primeros rastros de Carlos José Gascón González aparecen poco después. Cuando fue arrestado, cargaba varios pasaportes con diferentes nombres, uno de los cuales, según señalan varios medios, era [Juan González](#).

A pesar de que InSight Crime no pudo confirmar si había dos El Gochos haciendo negocios de drogas en el Caribe o si era solo uno, las maniobras de González Contreras en el caso de los narcosobrinos demuestran la continuidad entre las generaciones de narcos, ya que es casi seguro que él no le estaba haciendo un favor a un traficante retirado: estaba haciendo negocios con alguien que sigue muy activo en el tráfico de estupefacientes.

Desde la cárcel, Gordito González no pudo reconstruir la infraestructura del Cartel de la Guajira ni intentar reclutar muchos miembros nuevos. En cambio, convirtió a la organización en un cartel de contratistas que podían conformar grupos específicos para cada cargamento. Así, su nueva base de operaciones comenzó a ser el principal punto de despacho de cocaína hacia República Dominicana y al Caribe holandés: el estado Falcón.

En Falcón, González Polanco y otros traficantes, como sus ocasionales socios comerciales del Cartel de Paraguaná, organizan envíos mediante intermediarios, quienes contratan a residentes de las comunidades locales para almacenar, custodiar y transportar cocaína.

“No se sabe a quién pertenece el cargamento, uno no tiene contacto directo con ellos, siempre hay un intermediario”, dijo a InSight Crime un pescador local, quien pidió permanecer anónimo. “Una persona te recluta, otra te paga, otra entrega la mercancía; a cada una la ves en una sola ocasión”.

Sin embargo, los operadores trabajan al margen de la acción; nunca se les ve cerca de las drogas.

“[González] Polanco es uno de ellos, pero casi nadie lo ha visto”, afirmó el pescador. “A todos los que movemos la mercancía nos pagan cuando la entregamos, y eso es todo”.

A pesar de su condena por narcotráfico, la principal ventaja de Gordito González son sus continuas alianzas con actores estatales corruptos. Múltiples fuentes de la región y el país declararon a InSight Crime que este tenía nexos estrechos con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“[González] Polanco es un peso pesado de la Guardia Nacional, tiene muchos aliados en sus filas”, dijo un oficial de la GNB en Falcón, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Los comandantes de la GNB en Falcón lo ayudan a transportar la mercancía y también tiene apoyo político”.

No se sabe cómo Gordito González conservó sus conexiones estatales, a pesar de que su sobrina se estableció en Colombia con Alcalá, ahora uno de los traidores más vilipendiados del régimen. Tampoco se sabe cómo continúa operando desde la cárcel, o incluso si realmente está en prisión.

“Hay muchas, muchas personas involucradas en el tráfico de drogas en Venezuela, en los niveles más altos”.

A principios de 2020, varias fuentes le dijeron a InSight Crime que Gordito González dirigía sus operaciones desde una prisión en Barquisimeto, en el estado Lara, aunque una fuente también mencionó la prisión Vista Alegre en Anzoátegui. Ya en 2021, varias fuentes están convencidas de que Gordito González se encuentra en El Helicoide, la prisión de Caracas donde están recluidos presos políticos y otros personajes de alto perfil.

Muchas otras fuentes dicen que vive con su familia en Panamá. Los informes de prensa son igualmente confusos, y [algunos afirman que escapó de prisión](#) desde 2013. Una fuente dijo incluso que el encarcelamiento de Gordito González es una artimaña.

Muchas de las personas consultadas dicen que no se sorprenderían si alguna de esas versiones resulta ser cierta, pero todas están convencidas de una cosa: dondequiera que esté, Hermágoras González Polanco no está encerrado en una celda de prisión.

Independientemente de su ubicación, el hecho de que Gordito González siga siendo uno de los traficantes más poderosos de Venezuela, después de más de una década de haber sido arrestado, da cuenta de su capacidad para adaptarse al papel de operador en el tráfico de drogas venezolano. Pero el verdadero secreto de su permanencia ha sido su capacidad para seguir siendo útil para las redes del Cartel de los Soles y para los reguladores del narcotráfico en los niveles más altos del gobierno venezolano.

“Hay funcionarios del ejército y el gobierno que son cómplices de estos operadores; su objetivo es obtener dinero y mantenerse en el poder”, afirmó Mildred Camero. “Hay muchas, muchas personas involucradas en el tráfico de drogas en Venezuela, en los niveles más altos”.



InSight Crime es un centro de pensamiento y un medio de comunicación sin ánimo de lucro que combina el periodismo investigativo con rigor académico, basando sus análisis en la investigación en campo y testimonios de todos los actores, legales e ilegales. InSight Crime busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe mediante la publicación periódica de informes, análisis e investigaciones sobre este flagelo y sobre los esfuerzos de los Estados para combatirlo.

Para más información, visite es.insightcrime.org